

CONTRALÍNEA

PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN



RIESGOS A LA SEGURIDAD NACIONAL 2021 ESTADOS UNIDOS, COVID Y CRISIS ECONÓMICA



ISSN: 1665-1626

REVISTA SEMANAL

Del 1 al 7 de febrero de 2021



Año 19 • Número 731 • \$30

LAS RAZONES DEL PRESIDENTE
PARA QUE SÁNCHEZ CORDERO LO SUSTITUYA



UNA NUEVA AGENDA
PARA LA DEFENSA ESTRATÉGICA DE MÉXICO

VISITA LA EDICIÓN IMPRESA DE LA REVISTA

CONTRALÍNEA

PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN

EN NUESTRA PÁGINA

www.contralinea.com.mx

The image displays a screenshot of the Contralínea website interface. At the top, it shows the date "miércoles 28, octubre 2020" and navigation links for "DIRECTORIO" and "HISTÓRICO POR AÑO". The main header features the "CONTRALÍNEA" logo and a search bar. Below the header, there are navigation tabs for "INICIO", "PORTADA", "INVESTIGACIÓN", "ANÁLISIS", "OPINIONES", "REVISTA", "CONTRALÍNEA TV", "NOTICIAS", and "COVID-19". A "Historico por año" section allows users to select a year from 2019 to 2002. A "Consultar por número de edición (2020 al día de hoy)" section displays three magazine covers: "GENOCIDA", "DETENCIÓN DEL GENERAL CUERNOS CONTRA AL ESTADO MEXICANO", and "DOCUMENTOS DE SIENA Y POR UN OJO". A video player is overlaid on the left, showing a video titled "CERCA JUICIO A CALDERÓN POR CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD" with a thumbnail of Felipe Calderón. The video player includes a progress bar and controls for share, save, like, and download. On the right, a "PORTADA #717" section shows the magazine cover "GENOCIDA" with the headline "CORTE PENAL DE LA HAYA PREPARA DICTAMEN DE JUICIO CONTRA FELIPE CALDERÓN". A red circle highlights the text "Consulta ediciones anteriores AQUÍ" with a red arrow pointing to it. Below this, there is a link to "Descarga aquí el pdf de la Edición 717".

DIRECTOR Miguel Badillo
oficiodepapel@yahoo.com.mx

COORDINADORES

INFORMACIÓN Y EDICIÓN WEB

Nancy Flores
nancy@contralinea.com.mx

EDICIÓN IMPRESA Zósimo Camacho
zosimo@contralinea.com.mx

CONTENIDO DIGITAL Héctor Badillo
hector@contralinea.com.mx

CONTRALÍNEA TV Érika Ramírez
esoemi@contralinea.com.mx

DISEÑO Miguel Minero
mimiga@contralinea.com.mx

PUBLICIDAD Martha Moreno
mmoreno@contralinea.com.mx

WEB Hugo Sadh

ILUSTRADOR David Manrique
manrique@contralinea.com.mx

► **OPINIÓN**

- 4 **AGENDA DE LA CORRUPCIÓN PEMEX RENUNCIA TRANSFERIRLE A PEP LOS FLOTELES CONSTRUIDOS EN VIGO, ESPAÑA** Nancy Flores
- ARTÍCULOS**
- 6 **DETRÁS DEL IMPEACHMENT CONTRA TRUMP** Pablo Moctezuma Barragán
- 10 **BIDEN ANTE EL DESGASTE DEL MODELO DEMOCRÁTICO EN ESTADOS UNIDOS** Martín Esparza
- 12 **ALEMANIA: NORD STREAM 2 EN LA FASE FINAL DE CONSTRUCCIÓN PESE A LAS SANCIONES** Axel Plasa
- 14 **LA TRIPLE CRISIS DE HONDURAS** Nery Chaves García/Celag
- 18 **CAPITOLIO, DEMOCRACIA Y ECONOMÍA** Juan J Paz y Miño Cepeda/Prensa Latina
- 20 **LA PANDEMIA REFUERZA LA MISERIA DE LOS SECTORES EMPOBRECIDOS** Sergio Ferrari/Rebelión
- 24 **“SU ESPERANZA DE UN FUTURO MEJOR NOS INSPIRA A TODOS”** Yasmine Sheriff/ Inter-Press Service (IPS)

► **INVESTIGACIÓN**

- 26 **PORTADA** Estados Unidos, pandemia y economía, principales riesgos a la seguridad nacional de México Zósimo Camacho
- 36 **SOCIEDAD** Las razones de AMLO para que Sánchez Cordero lo sustituya Jordana González y Érika Ramírez
- 42 **LÍNEA GLOBAL** Acabar con la mutilación genital femenina pasa porque deje de ser un secreto Jordana González/Karen Ballesteros

► **ANÁLISIS**

- 48 **POLÍTICA** Una nueva Agenda Nacional de Riesgos para una nueva Ley de Seguridad Nacional Emilio Vizarratea Rosales
- 54 **INTERNACIONAL** La larga sombra de la epidemia de cáncer y Covid-19 en Irak Mac Skelton/Middle East Research and Information Project-Rebelión



Imagen de portada: 123RF

CONTRALÍNEA. PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN—año 19, número 731, del 1 al 7 de febrero de 2021— es una publicación semanal editada por Difusión de Información, SA de CV; Ruiseñor, 11-2, El Rosedal, Coyoacán, CP 4330, Ciudad de México; teléfono: 55 54 91 94; www.contralinea.com.mx; info@contralinea.com.mx. Editor responsable: Agustín Miguel Badillo Cruz. Número de reserva al título de derecho de autor: 04-2001-1206164804 00-102. Número de certificado de licitud de título: 12264, y de contenido: 8918. ISSN: 1665-1626. Impresa por Difusión de Información S.A. de C.V., Insurgentes Centro 98, colonia Tabacalera, Ciudad de México, teléfono 55549191. Este número

se terminó de imprimir el 29 de enero de 2021. Distribuida por la Unión de Voceadores de México, despacho de Gloria Santillán, Ignacio Manscal 44, col. Tabacalera, CP 06030, México, DF, teléfono 55 92 08 91. CONTRALÍNEA reconoce el deber de veracidad y la cláusula de conciencia de reporteros y articulistas. Los textos son responsabilidad de sus autores. Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda totalmente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos o imágenes de la publicación sin previa autorización de Difusión de Información S.A. de C.V.

REDACCIÓN 5554-9194 • PUBLICIDAD 5554-9191

Ruiseñor 11-2, colonia El Rosedal, alcaldía de Coyoacán, CP 04330, México, DF



Circulación certificada por Romay Hermida y Cía, SC, folio: 00010-RHY



PEMEX RENUNCIA TRANSFERIRLE A PEP LOS FLOTELES CONSTRUIDOS EN VIGO, ESPAÑA

NANCY FLORES

A fines de 2020, Petróleos Mexicanos (Pemex) decidió renunciar a su intención de transferir los floteles Cerro de la Pez y Reforma Pemex a su subsidiaria Exploración y Producción (PEP). Con ello, dejará como propietaria a su filial “privada” *offshore* PMI Norteamérica, SA de CV, integrante del Grupo PMI.

Construidas en España en el sexenio pasado —como parte de los compromisos heredados de Felipe Calderón, quien se empeñó en rescatar la industria española de Vigo en plena crisis en vez de destinar los recursos públicos a los mexicanos—, las plataformas habitacionales permanecen casi en desuso. Y es que antes de la pandemia de Covid-19 —cuando todo el personal de la petrolera se encontraba trabajando— el propio ingeniero Octavio Romero Oropeza, director general de Pemex, admitía que la ocupación de los mismos rondaba en el 70 por ciento, por lo cual es obvio que ahora estará en menos del 50 por ciento.

Desde que recibió las unidades, Pemex planeaba ceder su propiedad a PEP y con ello seguir allanando el camino para la liquidación de PMI Norteamérica. No obstante, a fines del año pasado reculó sin dar visos de que pronto pueda ser una subsidiaria la que tenga bajo su control estos bienes públicos y, con ello, dejar de triangular los recursos públicos y, sobre todo, transparentar su manejo.

La decisión le fue comunicada al Consejo de Administración —que encabeza la secretaria de Energía, Rocío Nahle— el pasado 2 de diciembre, en la sesión ordinaria 963. Por ello, éste autorizó modificar los acuerdos CA-142/2016

y CA-103/2019 que había tomado el 14 de diciembre de 2016 y 15 de agosto de 2019, respectivamente, en el sentido de trasladar la propiedad a PEP. El cambio en los acuerdos se estableció “a fin de cancelar la transferencia de las Unidades Habitacionales Flotantes”.

En esa misma sesión, el Consejo “tomó conocimiento de que PMI Norteamérica, SA de CV, mantiene la propiedad de las Unidades Habitacionales Flotantes denominadas Cerro de la Pez y Reforma Pemex y, en consecuencia, con la administración y operación de las mismas”. Así como de la modificación de la tarifa del contrato 428224804 Tipo A de servicios de alimentación y hotelería con el apoyo de los dos floteles. Éste se refiere a la subcontratación de los servicios por la cual PEP tiene que pagar cuota fija, incluso si las plataformas se encuentran semivacías.

Subarrendamiento

Al cancelar la cesión de los floteles, Pemex obliga a PEP a seguir subarrendando ambas plataformas, como lo ha tenido que hacer hasta ahora, luego de que su venta fallara pues el mercado petrolero se encuentra contraído desde hace ya más de 10 años.

La historia de cómo PEP se ha sometido a decisiones políticas y no a sus propias necesidades es evidente en este caso: la compra de los floteles y del astillero Hijos de J Barreras fue un compromiso hecho por Juan Camilo Mouriño, asumida por el panista Calderón tras el fallecimiento de su amigo y socio, y concretada por Peña Nieto [<https://bit.ly/3b75iuv>].

Fue finalmente en 2013 –cuando al frente de la petrolera se encontraba el priista Emilio Lozoya Austin–, que Pemex Exploración y Producción (PEP) licitó dos contratos de servicios de alimentación y hotelería a bordo de dos Unidades Habitacionales Flotantes, a fin de cumplir con las metas de producción de las subdirecciones de Producción Bloques Aguas Someras AS01 y AS02. La empresa ganadora, agrega, fue PMI Norteamérica, SA de CV [propiedad de Pemex e integrante del Grupo PMI], la cual, en conjunto con dos astilleros españoles, construyó los fleteles Reforma Pemex y Cerro de la Pez.

De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación –en su auditoría *Inversión en unidades habitacionales flotantes y su participación accionaria en astilleros*– no fue posible constatar que las dos unidades, entregadas por los astilleros a PMI Norteamérica, cumplieron con las características establecidas en las licitaciones públicas que emitió PEP, debido a que no se proporcionaron las actas de entrega-recepción correspondientes.

Aunado a ello, el máximo órgano de fiscalización reportó

que la aceptación final del Reforma Pemex –construido por Hijos de J Barreras, el astillero vigués que dejó de ser propiedad mayoritaria de Pemex en condiciones muy desventajosas para México– fue el 30 de diciembre de 2016, con un costo de 3 mil 740.18 millones de pesos. En 2017, esta unidad se encontraba en operación y fue contratada por PEP para prestar los servicios de alimentación y hotelería en las plataformas de producción.

En el caso de Cerro de la Pez –construida por el astillero Navantía, SA, también de origen vigués– detalla que se entregó a PMI Norteamérica el 10 de febrero de 2017, y su costo ascendió a 3 mil 115.26 millones de pesos. De acuerdo con la ASF, este flotel se mantuvo atracado en el astillero por 452 días, con un costo diario de guarda y custodia de 3.6 mil dólares, lo que generó un costo para su propietaria PMI Norteamérica de 1 millón 627.2 mil dólares, equivalentes a 30.41 millones

de pesos, desde su entrega hasta el 11 de abril de 2018, fecha en que zarpó a México.

En febrero de 2019, la ASF “obtuvo información relacionada con el tráfico marino, mediante la cual se conoció que la unidad Cerro de la Pez se encuentra en la zona de Coatzacoalcos, Veracruz, México”.

El informe agrega que, en julio de 2017, el Consejo de Administración de Pemex autorizó la desinversión de ese flotel, y se consideró que la desinversión permitiría cubrir las necesidades de PEP. Sin embargo, no se proporcionó el contrato mediante el cual se formalizó la compra-venta de Cerro de la Pez, lo que impidió comprobar la realización de esa operación, argumentando que “forma parte de la operación propia de la empresa filial PMI Norteamérica, y se encuentra sujeto a cláusulas de confidencialidad negociadas entre partes privadas”.

Ante la Auditoría Superior, “Pemex indicó que PMI Norteamérica no es una entidad de derecho público, no lleva a cabo operaciones que involucren recursos públicos federales o participaciones federales, se encuentra

organizada conforme al derecho privado y las operaciones que realiza se rigen por el derecho común”.

De acuerdo con la ASF, “la restricción de la información generada, como parte de las operaciones de las empresas filiales de Petróleos Mexicanos, impidió que durante la ejecución de la auditoría se comprobara que las unidades habitacionales flotantes Reforma Pemex y Cerro de la Pez, entregadas por los astilleros a PMI Norteamérica (empresa filial de Petróleos Mexicanos) cumplieron con las características de los bienes previstas en las licitaciones públicas que emitió Pemex Exploración y Producción”.

La decisión de dejar ambas plataformas en manos de una de las filiales del Grupo PMI, sin duda, sigue abonando a la opacidad que tanto ha criticado la ASF. Esperemos que pronto el gobierno de Andrés Manuel López Obrador pueda corregir este error. ◀

“La decisión de dejar ambas plataformas en manos de una de las filiales de PMI sigue abonando a la opacidad que tanto ha criticado la ASF”



DETRÁS DEL IMPEACHMENT CONTRA TRUMP

PABLO MOCTEZUMA BARRAGÁN, DOCTOR EN ESTUDIOS URBANOS, POLITÓLOGO, HISTORIADOR Y MILITANTE SOCIAL

En Estados Unidos avanza segundo *impeachment* contra Donald Trump. Está en el Senado desde el lunes 25 al senado. Al expresidente se le someterá a su segundo juicio político, por primera vez en la historia del país, por “incitar a la insurrección” con el asalto al Capitolio el 9 de febrero.

El lunes una delegación de demócratas de la Cámara de Representantes, lista para que sus integrantes se conviertan en fiscales, marchó por el Capitolio, ya en la noche, para entregar la acusación contra Trump y así inicia un juicio sin precedentes contra un expresidente. Los nueve encargados del juicio político de la Cámara seleccionados por Nancy Pelosi entregaron el artículo de juicio político y el encargado principal Jamie Raskin de Maryland lo leyó en voz alta en el piso de la Cámara.

En el juicio de *impeachment* contra Trump se necesitan 17 votos republicanos en el Senado para condenarlo. Ambos partidos cuentan cada uno con 50 escaños en el Senado, la vicepresidenta Kamala Harris decide si hay empate, pero se necesitan dos terceras partes para condenarlo, es decir, 67 votos. Es difícil que prospere este proceso que busca que Trump no pueda volver a contender por la Presidencia.

Por otra parte, en su primer mensaje presidencial, Joe Biden convocó a “poner fin a esta guerra civil que enfrenta al rojo contra el azul,

lo rural a lo urbano, lo conservador a lo liberal”. Hablan de “guerra civil” y de “insurrección”.

Recordemos que la Guerra Civil estadounidense –1861-1865– no era calificada como tal por el presidente Abraham Lincoln, quien trató de evitar llamarla guerra civil o insurrección. Se refirió a las acciones de “pandillas, merodeadores, *hooligans* y no fue hasta su discurso de Gettysburg en noviembre de 1863 que lo llamó guerra civil.

Es significativo para los argumentos hechos hoy, que están impulsando la insurrección en

“Castigan a Trump, pero en realidad buscan ampliar la criminalización de la protesta. Utilizan cargos como ‘insurrección’ para advertir a disidencias”

lugar de la reconciliación, a pesar de que Biden se presenta como un unificador. Esto incluye pedir la destitución de los representantes de la Cámara de Representantes

que impugnaron la certificación del Voto del Colegio Electoral por ser “partidarios de la insurrección”. A pesar del hecho de que entre 600 mil y 700 mil personas murieron durante la guerra, Lincoln ni siquiera quiso llamarlo una insurrección. La Enmienda 14 se adoptó en 1868 tras la guerra civil y es inquietante que hagan uso de ella.

Pero el 11 de enero la Cámara no perdió tiempo en llamar a los acontecimientos del 6 de enero una insurrección, en lugar de un motín o una protesta violenta u otro lenguaje similar.

El Comité Judicial de la Cámara de Representantes argumentando por acusar a Trump



de “incitación a la insurrección”, y también quieren juzgar al senador Ted Cruz de Texas y a los senadores que se unieron a él en la impugnación de la certificación de la votación, contra todos utilizan referencias de la Guerra Civil para hacer sus argumentos.

El informe judicial utiliza la Décimo cuarta Enmienda, sección 3, argumentando que el cargo de “incitación a la insurrección” es necesario ya que la “amenaza que se manifestó en el Capitolio está en curso. La emergencia sigue con nosotros”. Esto se refiere a la amenaza de la violencia en Washington, DC, y los capitolios del Estado en todo el país. La Enmienda citada es una de las tres Enmiendas de la Guerra Civil (la Décimo tercera, ratificada en 1865 al final de la Guerra Civil; la Décimo cuarta, ratificada en 1868, y la Décimo quinta, ratificada en 1870). La 14 prohíbe que cualquier perso-

na, miembro del Congreso u oficial de Estados Unidos que se haya dedicado a la insurrección o rebelión tenga cualquier cargo.

La 14, data del período de la Reconstrucción (1865-1877) y tras la elección tan competitiva entre Hayes-Tilden, se usó para imponer el período de reconstrucción aplastante, con tropas federales retiradas del sur a cambio de lo cual Hayes obtuvo la Presidencia.

Según los argumentos de la época, también se utilizaron cargos de insurrección contra los trabajadores que luchaban por defenderse. Grandes conmociones estaban ocurriendo en términos del desarrollo del Estado de Estados Unidos. El ferrocarril transcontinental se completó y hubo una grave depresión después de la Guerra Civil, en 1873. En 1877 el ferrocarril de Baltimore y Ohio (B&O) se completó. En Virginia Occidental, los ferrocarriles redujeron



dos veces los salarios y los trabajadores estallaron la huelga. Y se utilizaron cargos de insurrección contra los trabajadores que luchaban por defenderse, luego estallaron una huelga nacional y se llevaron a cabo huelgas generales en ciudades específicas como Saint Louis y Chicago. Los trabajadores del hierro, del acero y los mineros del carbón, también se fueron a la huelga los blancos y negros, para luchando por eliminar toda esclavitud. Y fueron acusados de “insurrección”.

Ahora frente a pandemia, crisis y racismo, desde marzo de 2020 hay un movimiento de trabajadores exigiendo empleo, atención médica y una transferencia pacífica del poder. Unas 600 mil personas planeaban una huelga general el 20 de enero si Trump usaba a las fuerzas armadas. Trabajadores sanitarios, de enfermería y medicina, obreros, desempleados han estado

luchando por sus derechos, por un cambio en la dirección del país y una nueva constitución. Recientemente en Portland, Oregón, Denver han habido diversas protestas.

Pero el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por su sigla en inglés), y otras agencias policiacas los van a calificar como “extremistas violentos domésticos” e incluso usan a las milicias armadas y los desmanes para criminalizar a todos. Por estar contra la Constitución, la Ley y el Orden, cuando lo que buscan es un cambio en el sistema que les niega sus derechos. Recordemos que Díaz Ordaz —dice Daniel Cossío Villegas en su memoria— afirmó que México estaba al borde de una guerra civil con el fin de reprimir a los jóvenes del Movimiento de 1968.

El *establishment* en Estados Unidos, lanza campañas de desinformación lo que implica un

esfuerzo por interrumpir y destruir a la amplia opinión pública que existe que el país, y que piensa que éste sigue en la dirección equivocada, que no hay medios para responsabilizar al gobierno, y que se niegan repetidamente, de manera flagrante los derechos humanos básicos a la atención sanitaria, la vivienda, la educación y el sustento. A quienes protesten se le considera como “extremistas” merecedores de castigo. Parte de esto es cosificar a grupos enteros de personas como cosas, usando iniciales, como DVE: Domestic Violent Extremists, para “extremistas violentos domésticos”, para descalificarlos. Hacerlo deshumaniza a las personas que son marcadas, haciéndolas cosas sujetas a la violencia del gobierno y al castigo colectivo, y no se les considera como seres humanos que exigen derechos. Si bien el Boletín de las policías incluye a milicias, hay abundantes pruebas, incluso a partir del 6 de enero, de que el gobierno respalda y a menudo arma a estas milicias y es muy consciente de sus planes, pero no las interfiere ni las detiene. Se incluyen en parte para ocultar este hecho.

Las demandas del pueblo no provienen de una defensa del orden constitucional, sino de derechos que le pertenecen al pueblo. Las demandas provienen de sus calidad de seres humanos, exigiendo los derechos humanos, la equidad y la rendición de cuentas. El choque entre las dos concepciones es muy real. Biden y los demócratas se esfuerzan desesperadamente por bloquear las demandas de equidad y derechos y buscan someter a los jóvenes y a los trabajadores a este orden constitucional disfuncional y obsoleto, que ha demostrado que no puede proporcionar igualdad y que sólo ha sido fuente de problemas e injusticias y no de la solución de las necesidades más básicas. Y ahora con la pandemia de la Covid-19 se ha visto muy claro la violación de derechos fundamentales que la Constitución no garantiza en los hechos.

“Detrás de las apariencias, de las imágenes selectivas que nos presenten y de los estigmas, existe un pueblo estadounidense que quiere democracia real”

No hay duda alguna de que este esfuerzo por la igualdad y el empoderamiento de las personas y un cambio de régimen de gobierno, para que éste responda a los intereses de la sociedad seguirá intensificándose en los próximos años durante la administración Biden.

Ahora, frente a la pandemia, la crisis y el racismo, diversos colectivos se movilizan y buscan soluciones, pero el FBI y otras agencias policíacas los van a calificar como “extremistas violentos domésticos”. El esquema es conocido: hablan de extremistas de derecha por un lado y los extremistas de izquierda por otro. El estado infiltra provocadores y busca que en cada protesta pacífica haya un grupo que produzca incendios y desmanes, entonces la policía actúa violentamente, gasea y golpea a los manifestantes y hasta a los periodistas que buscan resistir y defenderse. Los medios de comunicación escandalizan sobre las “jornadas de violencia” y culpan a los extremistas, creando una cortina de humo que oculta el fondo de los problemas y la justicia de las demandas populares. Por otro lado, es claro que la

represión es selectiva, pues a las protestas progresistas y a manifestantes afroamericanos, les dan con todo, mientras que a los supremacistas blancos los dejan actuar abiertamente y exhibir sus armas, sin que la policía intervenga.

Debemos de estar atentos a los reportes de los principales medios de comunicación, cuando recibamos las informaciones, para tener claro que, atrás de las apariencias y de las imágenes selectivas que nos presenten y de los estigmas, existe un pueblo. Que no todo son luchas cupulares, pues hay un gran movimiento en la base. Estemos seguros que tarde o temprano, la lucha del pueblo de Estados Unidos por sus derechos prevalecerá, por el bien de todos y por encima de un sistema obsoleto, que sólo favorece a las corporaciones y a su búsqueda de dominio mundial, a las guerras e injusticias. El pueblo de estadounidense lucha por paz, justicia, libertad y por una renovación democrática. ◀



BIDEN ANTE EL DESGASTE DEL MODELO DEMOCRÁTICO EN ESTADOS UNIDOS

MARTÍN ESPARZA FLORES, SECRETARIO GENERAL DEL SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS

Al protestar el cargo como el presidente 46 de Estados Unidos, el demócrata Joe Biden, marcó un giro de 180 grados en lo que habrá de venir su gobierno y que, de manera indudable, repercutirá en su relación con sus socios comerciales del Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos, Canadá (Tmec).

En su primer mensaje a la Unión Americana y al mundo, el mandatario expresó: “Pocos momentos han sido más desafiantes para nuestra nación. Y hablo del impacto de la pandemia del coronavirus, del grito de justicia racial. Tenemos que confrontar la supremacía blanca, el terrorismo doméstico. Para restaurar el alma de Estados Unidos se requiere más que palabras”.

Expresó, además: “Entiendo que muchos miran al futuro con temor; que se preocupan por sus empleos. Les prometo que entiendo. Pero la respuesta es no dejar de confiar en los que no son igual a ustedes. Tenemos que terminar con esta guerra civil que pone el rojo contra el azul, republicanos contra demócratas, conservadores contra liberales”.

Biden sabe perfectamente que asume el cargo en una nación polarizada por la actitud intolerante de su antecesor, Donald Trump, quien rompiendo el protocolo republicano no asistió a la toma de posesión del nuevo mandatario, luego de que el pasado 6 de enero, a través de las redes sociales, alentara la toma violenta del Capitolio, buscando impedir la ratificación del triunfo de su opositor.

En medio de un impresionante dispositivo de seguridad policiaco y militar, se dio su toma de

protesta ante el riesgo de que los simpatizantes de Trump y miembros de la ultraderecha estadounidense, intentaran nuevos disturbios en Washington.

Pero no sólo en lo interno, también en su relación con el resto de las naciones, el nuevo presidente estadounidense deberá asumir un punto de quiebre; por ejemplo, anunció ya la cancelación del absurdo muro de Trump en la Frontera con nuestro país, que el exmandatario pretendió cobrar a México.

Uno de sus primeros actos fue rendir homenaje a los 400 mil estadounidenses que han muerto por la pandemia de Covid-19, a la que su antecesor relegó a un segundo plano de importancia y que ahora se asume como una de las tareas prioritarias para Biden, consciente de que no podrá haber recuperación económica si antes no se detiene el desbordado problema de salud, al que Trump nunca asumió en su grave dimensión al haber realizado actos masivos durante su campaña presidencial, exponiendo a sus seguidores a los contagios.

La crisis poselectoral que enfrentó el sistema estadounidense deberá ser motivo de una profunda reflexión y análisis en la agenda del gobierno de Biden y de los congresistas demócratas, porque su sistema de elección donde no siempre suele ganar el candidato que obtiene el voto de las mayorías, parece que no estar acorde con los nuevos tiempos y los estadounidenses deben contar con un modelo electoral que no deje duda alguna en las elecciones por venir.

Biden está consciente de que existe un riesgo permanente por parte de grupos de ultraderecha a los que encuadra como “terrorismo doméstico”, por atentar contra los derechos de diversos sectores sociales. La cruz sureña que apareció en el Capitolio, y ondeó por sus pasillos, mostró que el violento racismo contra la comunidad afrodescendiente y latina, subsiste a pesar de las décadas de cruentas luchas y represiones.

El intento de Trump por segregar a los *dreamers*, y separar a miles de familias de migrantes, habla de la existencia de poderosos intereses a los que no les importa respetar los sagrados principios de la democracia estadounidense. Por ello, debe garantizarse en lo futuro el voto de todos y cada uno de los ciudadanos del vecino país, tenga el mismo valor y sea respetada la voluntad de las mayorías. De no hacerlo, escenas violentas como las sucedidas en el Capitolio podría replicarse en los próximos años.

Analistas estadounidenses coinciden en que el presidente Biden deberá asumir medidas que reviertan los daños causados a la economía por Trump, pero además, asumir una posición más institucional y menos temperamental en el terreno de los compromisos pactados en el Tmec, donde en no pocas ocasiones el republicano amenazó con imponer sanciones arancelarias a sus socios, de manera arbitraria y caprichosa.

En el terreno de los compromisos, los congresistas demócratas al igual que los canadienses, pondrá un especial énfasis en el cumplimiento de lo acordado en el capítulo laboral donde en México aún queda mucho por hacer por garantizar que los trabajadores ejerzan sin presiones de sindicatos charros y patronales, su derecho a pertenecer al sindicato que gusten y elegir a sus dirigentes mediante el voto libre, directo y secreto.

Aún antes de asumir el cargo el demócrata Biden, en el primer informe rendido por el Grupo Independiente de Expertos Laborales, expuso el pasado 15 de diciembre, los retos pendientes en nuestro país por implementar verdaderos instrumentos de transparencia y el combate a los contratos de simulación.

Es de esperarse que las inercias prevalecientes en muchas centrales corporativas se conviertan en un riesgo y lastre para cumplir con las obligaciones



laborales del Tmec, que incluso en las adversas circunstancias de la pandemia, han permitido la mutilación de derechos a los asalariados, tratando además de obstaculizar el proceso de libre sindicalización.

Cabe destacar que uno de los puntos álgidos tocados en el informe de los panelistas laborales del tratado comercial fue precisamente el de las *outsourcings*, mecanismo de contratación que han defendido con uñas y dientes cúpulas empresariales y centrales como la Conferencia de Trabajadores de México.

Los expertos en la materia, dejaron en claro que tal modelo mediante el cual se contrata a unos 4 millones de mexicanos, es atentatorio a los derechos esenciales de los trabajadores. El asunto adereza con pronósticos de tormenta al debate que habrá de darse sobre el tema, en febrero próximo en el Congreso mexicano.

Con Biden en la Casa Blanca temas como la defensa de los derechos humanos y las energías renovables, también serán de primer orden y habrá de impactar en la relación bilateral con México. ◀



ALEMANIA: NORD STREAM 2 EN LA FASE FINAL DE CONSTRUCCIÓN PESE A LAS SANCIONES

AXEL PLASA

Berlín, Alemania. El pasado 15 de enero 2021 la Agencia Federal Marítima e Hidrográfica (BSH) alemana anunció el permiso para reanudar la construcción del gasoducto Nord Stream 2 en el tramo final entre Dinamarca y Alemania. En 2019 las obras se detuvieron después de que dos senadores estadounidenses enviaran una carta a la empresa gestora del puerto de Mukran, Alemania amenazando con sanciones económicas.

Al contar con el permiso de las autoridades alemanas, danesas y suecas, se iniciaron las operaciones en el tramo de ductos faltantes entre la isla danesa de Bornholm y el litoral alemán de 150 kilómetros de los 2 mil 300 kilómetros de doble ducto que recorren desde el puerto de Ust-Luga en la Federación Rusa hasta Lubmin en la costa báltica alemana, que podrían llevar hasta 55 mil millones de metros cúbicos anualmente. De este recorrido restante 120 kilómetros recaen en mar territorial danés y 30 kilómetros en aguas alemanas. El barco ruso “Fortuna” encargado de colocar los ductos dejó el puerto alemán de Wismar y se encuentra ahora en aguas territoriales danesas. Dicha nave fue sancionada por la administración estadounidense saliente de Donald Trump.

En pos de coadyuvar a su terminación, el gobierno del estado federal de Mecklemburgo-Pomerania Occidental creó la Fundación Protección del Clima y el Medio Ambiente (Stiftung Klima- und Umweltschutz), la cual puede operar en el marco del gasoducto Nord Stream 2 y asumir responsabilidades puntuales en su gestión. Esta fundación que

es de propiedad mixta entre Gazprom y el gobierno mecklemburgués, se quiere de escudo contra las sanciones estadounidenses que pesan sobre el proyecto.

Debido a la presión de Estados Unidos la aseguradora suiza Zurich y la empresa certificadora noruega DNV GL ya se retiraron del proyecto, alegando los regímenes de sanciones. No obstante, Gazprom persiste en culminar el tramo pese a los obstáculos interpuestos, y cuenta para ello con el apoyo de Manuela Schwesig, la jefa de gobierno mecklemburguesa, e indirectamente el buen visto del gobierno federal alemán.

El ministro de relaciones exteriores alemán Heiko Maas afirmó que “en nuestra opinión, estas sanciones, que son extraterritoriales, no están bien. Lo hemos dicho una y otra vez en el pasado”. La canciller alemana Angela Merkel dejó en claro que discutirá con el presidente Joe Biden sobre el tema a la brevedad. Empero, recalcó: “Mi posición básica sobre Nord Stream 2 no ha cambiado”.

El Partido La Alianza 90/Los Verdes pidió la suspensión del proyecto y el desmantelamiento de la fundación “fake” en manos de Putin. “Esta fundación es una fundación de Gazprom, aunque tenga otro nombre. Sólo está ahí para completar este oleoducto con este dinero de Putin”, afirmó Robert Habeck, copresidente del partido verde a la agencia DPA. Gazprom tiene una cierta influencia en esa fundación presidida por el exjefe de gobierno mecklemburgués Erwin Sellering, además de que

prometió transferir 20 millones de euros a sus haberes, ya que una de sus virtudes es que se puede adquirir material para la construcción sin exponerse a sanciones.

Otros opositores del proyecto son las asociaciones Unión de protección de la naturaleza (NABU por sus siglas en alemán) y la Ayuda Alemana al Medio Ambiente (DUH por sus siglas en alemán), que se dicen promotores de un modelo sustentable, en consecuencia se oponen al uso de gas natural por emitir gas metano en la combustión y por la protección de zonas naturales en la zona.

Entre las empresas que participan en este proyecto se encuentran las alemanas Uniper, BASF, Winterhall DEA, la anglo-neerlandesa Shell, la austriaca OMV y la francesa Engie. El entonces Secretario de Estado Mike Pompeo les había enviado cartas donde les avisaba sobre posibles sanciones en su contra por la “Ley para contrarrestar a los adversarios de Estados Unidos a través sanciones” (Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act) de 2017.

Uno de los argumentos más empleados por los contrincantes del proyecto, es la excesiva dependencia hacia

Rusia como proveedor. En la actualidad ese país es probablemente el exportador neto de gas a toda Europa, y a través de sendos gasoductos a través de Ucrania, Polonia y otros países terceros. La construcción de grandes proyectos como South Stream o Turkstream han buscado diversificar la ruta de exportación, cuando a menudo objetivos políticos en países de tránsito pueden poner en jaque el suministro a los mercados de destino.

A su vez el gobierno polaco emitió sus reservas, al considerar que con el gasoducto existente por su territorio ya se puede abastecer a Alemania. También acusó a Alemania de optar por la política de “Germany First”, y por no consultar a nadie de sus socios europeos. Si bien por un lado existe una cierta adversidad para con Moscú y en particular contra Gazprom, a quien pertenece el gasoducto, el interés de recibir el gas natural licuado norteamericano y ser el punto neurálgico para su distribución europea puede ser de peso para esta postura.

El embajador de Ucrania ante Alemania, Andrij Melnyk por su lado admitió ante la agencia Redaktionsnetzwerk Deutschland que la actuación de la jefa de gobierno mecklemburguesa “deja un caos y daña masivamente la credibilidad de Alemania. [...] Hace tiempo que se necesita una llamada al orden desde Berlín”.

Sin embargo, el ministerio de relaciones exteriores austriaco declaró en un tuit que “Austria rechaza rotundamente los planes de Estados Unidos de imponer sanciones extraterritoriales a la construcción del Nord Stream 2. Confiamos en el diálogo directo entre los socios, y no en las sanciones unilaterales”.

La Unión Europea por su lado considera esto claramente una iniciativa contraria a los intereses del bloque europeo y llevado para el beneficio ruso. El pasado 21 de enero 2021 el Parlamento Europeo adoptó una resolución donde “[...] pide a la Unión Europea y a sus Estados miembros que re-

visen de forma crítica la cooperación con Rusia en diversas plataformas de política exterior y en proyectos como el Nord Stream 2, cuya realización la Unión Europea debe detener inmedia-

“En puerta, un distanciamiento entre Berlín y Washington, lo cual no va a ayudar a remendar el estado de las relaciones que dejó Trump con Europa”

tamente”.

El presidente del Comité sobre energía del parlamento ruso, Pavel Zavalny por su lado reiteró a la agencia de prensa rusa Tass que “Nord Stream 2 se construirá definitivamente, todas las personas sensatas lo entienden. Las ambiciones de los países individuales [...] pueden presentar algunos obstáculos en esta etapa, pero al final, el Nord Stream 2 se construirá de todos modos”.

Mientras que Angela Merkel siga defendiendo este proyecto contra viento y marea es probable que se termine, así sea en junio o más tarde. Joe Biden podrá ejercer toda la presión económica contra Alemania que considere oportuno, y ahí se va a ver el margen que tiene hoy en día la política exterior estadounidense en los asuntos internos alemanes. Es posible que se produzca un cierto distanciamiento entre Berlín y Washington lo cual no va a coadyuvar a remendar el estado de las relaciones de cómo las dejó Trump. ◀



LATRIPLECRISIS DE HONDURAS

NERY CHAVES GARCÍA, INTERNACIONALISTA CON ÉNFASIS EN POLÍTICA EXTERIOR Y DIPLOMACIA POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COSTA RICA/CENTRO ESTRATÉGICO LATINOAMERICANO DE GEOPOLÍTICA (CELAG)

Como laboratorio de los golpes de Estado en el Siglo XXI, Honduras está sumida en una crisis sanitaria, económica y política cuya salida parece estar lejos.

El brote pandémico de la Covid-19 y los huracanes Eta e Iota agravaron la crisis política, económica, social y de derechos humanos instalada en Honduras.

Crisis que, lejos de solucionarse, se profundiza en una Honduras gobernada por una dictadura que cumplió 11 años en el 2020 y que ha condenado a la población al despojo, el desplazamiento forzoso y violencia.

Democracia en rojo: 11 años de dictadura

Honduras presenció el primer golpe de Estado consumado en América Latina en el Siglo XXI. El 28 de junio del 2009, el presidente Manuel Zelaya fue expulsado del país y conducido a Costa Rica. En pijamas, Zelaya denunció el golpe de Estado impulsado por sectores del Partido Liberal, el Partido Nacional y las Fuerzas Armadas. [1]

Desde entonces, la crisis se ha vuelto permanente en Honduras. El golpe de Estado instauró la dictadura del Partido Nacional, que ha logrado mantenerse en el poder tras una seguidilla de debilitamientos a la democracia y los principios de contrapesos entre los poderes: i) en 2012 el Partido Nacional cooptó la Sala Constitucional, que hoy blindó judicialmente las maniobras políticas de la dictadura; ii) en 2015 la Sala Constitucional falló a favor de Juan Orlando Hernández y avaló

su participación en las elecciones presidenciales de 2017, y iii) en 2017 un fraude electoral posibilitó la permanencia de Juan Orlando Hernández en el Ejecutivo.

Sin embargo, los constantes golpes han traído consigo importantes procesos de resistencia. En el plano político, nacieron los Partidos Libertad y Refundación (Libre) y Anticorrupción (Pac). Libre es de corte progresista y está encabezado por Manuel Zelaya, mientras que el Pac es de derecha. Ambos han logrado dinamitar la legitimidad de Juan Orlando Hernández, lo que ha tambaleado al Partido Nacional y debilitado su capacidad de gobierno. En el plano organizativo han sido claves el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de

Honduras (Copinh) y la Organización Fraternal Negra de Honduras (Ofraneh) para resistir al régimen dictatorial del Partido Nacional.

Sobre esta base política dictatorial, desigual

y mortífera, la Covid-19 prometía ser catastrófica. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) el 40 por ciento de la población hondureña se encuentra en pobreza extrema y el 67.4 por ciento en pobreza relativa [2].

Salud privada y selectiva

El debilitamiento del sistema de salud pública es estructural. Éste cuenta con alrededor de 3 décadas de atraso en inversión, periodo que coincide con la instalación del neoliberalismo en la región centroamericana a través de los Programas de Ajuste Estructural (Paes) del Fondo Monetario Internacional (FMI). Para 2018, según el Centro de

“Los constantes golpes a la democracia y a la sociedad han traído consigo importantes procesos de resistencia. Nacieron, incluso, nuevos partidos”



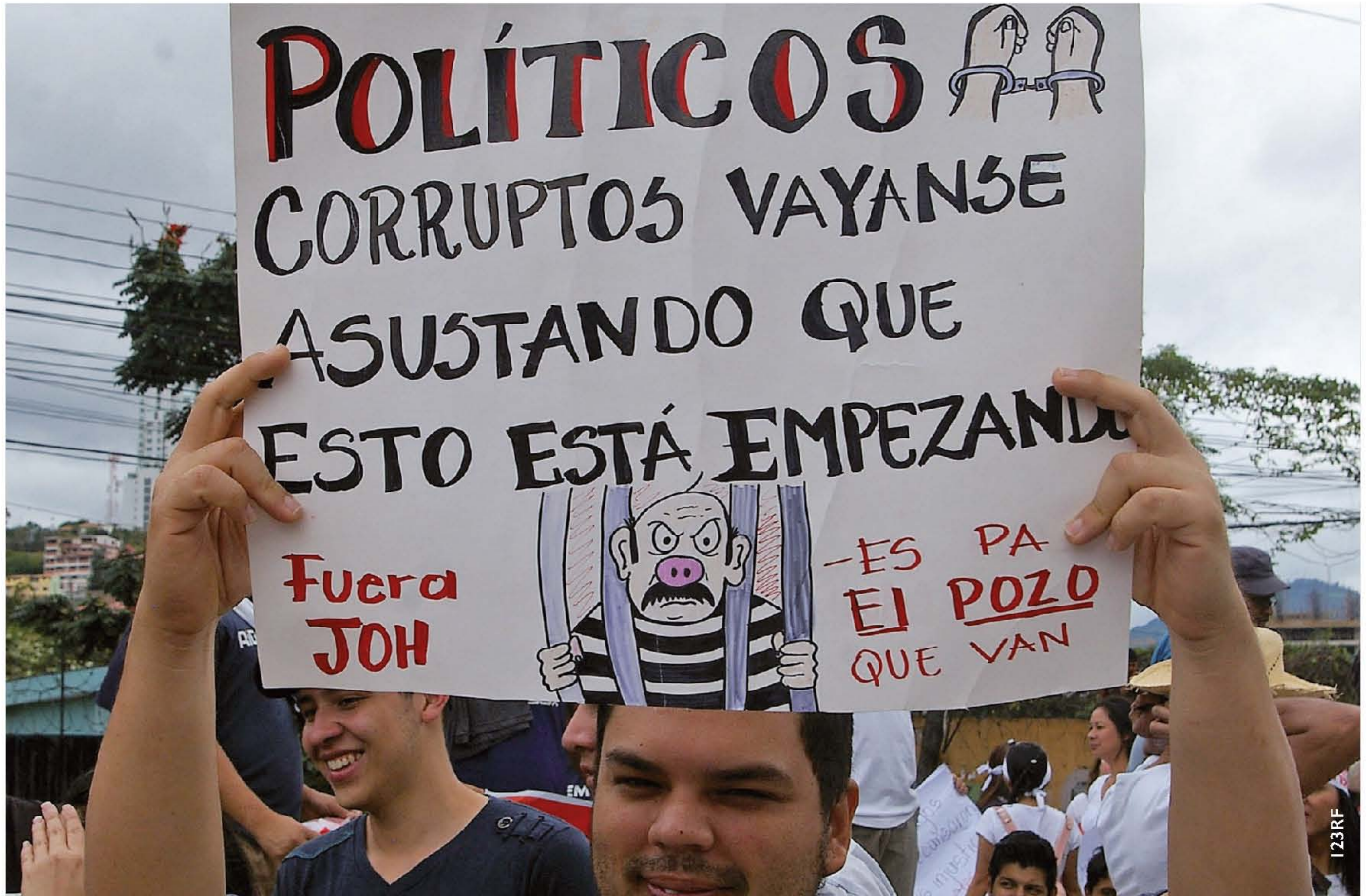
Estudio para la Democracia (Cespad), en Honduras nueve de cada 10 personas no están cubiertas por un seguro social y alrededor de 1.5 millones de personas no tienen acceso a la salud [3]. A ello se le suma la baja contratación de personal de salud –medicas (os) y enfermeros (as)– y falta de camas de hospital: en todo el país hay 5 hospitales regionales para 9 millones de personas.

Este complejo y desolador panorama fue el que recibió la pandemia de Covid-19. Para el 4 de enero, Honduras tenía un acumulado de 123 mil 369 casos de Covid-19 y 3 mil 180 fallecimientos por la misma enfermedad [4]. La estrategia contra la pandemia de Juan Orlando Hernández ha estado marcada por la improvisación, la negligencia, la corrupción y el acaparamiento.

Los casos de corrupción, como es usual, son prácticamente incontables y de distinta índole. Estos van desde la compra de 250 mil pruebas para detectar la Covid-19 sin los kits de extracción [5]

hasta compras de ventiladores a empresas que nunca antes los habían vendido y tampoco eran proveedoras del Estado. El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) ha realizado 11 investigaciones identificando un perjuicio a las finanzas públicas por 811 millones 634 mil 132 de lempiras –alrededor de 33 millones 673 mil 251 dólares– en 7 meses de pandemia [6].

Uno de los casos de corrupción más importantes fue el que benefició a las Fuerzas Armadas con la compra de cuatro ventiladores pulmonares modelo Evita V300 para el Hospital Militar. Estos ventiladores son los mejores adquiridos por la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco); con fondos públicos se abasteció un hospital que para personas civiles funciona como una clínica privada. Este hospital atendió a Juan Orlando Hernández cuando presuntamente se contagió de Covid-19; además, dicha institución está reservada para la atención de allegados al gobierno [7].



Así, la salud estaría garantizada para militares y el régimen dictatorial.

Además, la improvisación ha sido clave en la estrategia de Juan Orlando Hernández contra la Covid-19. Entre las decisiones sin ningún fundamento científico se encuentra la reapertura económica —denominada como “inteligente” por el gobierno— durante un pico de contagios en el mes de junio. También se implementó el tratamiento “maíz y catracho” para combatir la Covid-19: medicamento basado en cloroquina sin ninguna evidencia científica sobre su efectividad para el tratamiento de esa enfermedad. Por el contrario, de acuerdo a un estudio clínico publicado en la revista científico-médica *Lancet*, el uso de cloroquina —o hidroxicloroquina— fue asociada al aumento de riesgos en pacientes con Covid-19, debido a que esta incrementa las arritmias ventriculares y que, por lo tanto, está asociada con el aumento de mortalidad [8].

Huracanes Eta e Iota

Como si la Covid-19 no fuera suficiente, al cierre del 2020 dos huracanes pasaron por Honduras: Eta e Iota. Ambos con una diferencia de días dejaron más de un centenar de personas muertas, daños en infraestructura por más de 10 mil millones de dólares y según el Foro Social para la Deuda Externa (Fosdeh) se perderán alrededor de 860 mil empleos, 240 mil más de los estimados por la pandemia de Covid-19, y el índice de pobreza se prevé que llegará al 75 por ciento u 80 por ciento.

Una de las principales regiones afectadas por los huracanes fue el norte del país, el motor económico de Honduras. En dos semanas el país perdió cerca del 40 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), según Alejandro Kaffati, economista e investigador del Fosdeh [9]. Frente a ello, distintas organizaciones señalan

a Juan Orlando Hernández y a Max González, ministro de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), como los principales responsables de las afectaciones materiales y humanas de los huracanes. La negligencia de ambas autoridades es clara al emitir la alerta un día antes de que ingresara Eta al país [10].

Las alertas por las afectaciones de los huracanes Eta e Iota son altas, pues un escenario similar se vivió en el año 1998 cuando el huracán Mitch afectó a Honduras y Nicaragua. Este evento natural y los desastres sociales producidos por su paso son reconocidos como un punto de inflexión en la región ya que incidió en el aumento del flujo migratorio en Honduras [11]. Recientemente fue identificada una nueva caravana de migrantes hacia Estados Unidos. Esas 300 personas huyen por las afectaciones de los huracanes, además de las insuficientes acciones del gobierno [12].

El contexto hondureño es profundamente desolador y sin ningún avistamiento de cambio. Mientras la población sobrevive a duras penas a la dictadura, la Covid-19 y los huracanes, los partidos políticos se concentran en las elecciones primarias convocadas para el 14 de marzo del 2021 y en las presidenciales de noviembre (aún sin calendarizar) [13].

En ese plano, las presiones de Libre están dirigidas al Tribunal Supremo Electoral (TSE), para que garantice un padrón electoral real y que disminuya las posibilidades de fraude, así como una nueva Ley Electoral [14] Por su parte, Juan Orlando Hernández –cada vez más debilitado– está fuera de las internas del Partido Nacional y el nombre que resuena es el actual alcalde de Tegucigalpa, Nasry Afura. Afura está siendo investigado por malversación de fondos [15], situación que no desacredita su candidatura en el segundo país con mayores índices de impunidad [16]. Así, para Honduras no queda más que el camino organizativo político.

Notas

- [1] <https://www.celag.org/honduras-una-decada-de-golpes-e-inestabilidad/>
- [2] <https://muso.org/articulo/honduras-en-el-abismo/>
- [3] <https://cespad.org.hn/2019/05/24/salud-en-honduras-sin-camas-medicos-enfermeras-equipo-medicinas/>
- [4] <https://covid19honduras.org/>
- [5] <https://radioprogreso.hn.net/noticias-nacionales/invest-honduras-compra-pruebas-de-covid-19-incompletas/>
- [6] <https://otrasmiradas.info/todo-lo-que-ocurrio-mientras-mavis-agonizaba/>
- [7] <https://radioprogreso.hn.net/especiales/gobierno-esta-usando-dinero-de-emergencia-para-abastecer-hospital-militar/>
- [8] <https://radioprogreso.hn.net/portada/corrupcion-y-negligencia-el-manejo-de-covid-19-en-honduras/>
- [9] <https://radioprogreso.hn.net/portada/bajo-agua-el-valle-de-sula-el-polo-economico-de-honduras/>
- [10] <https://radioprogreso.hn.net/pt/joh-y-max-gonzalez-principales-responsables-de-la-emergencia-en-honduras/>
- [11] http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-75992013000200004
- [12] <https://radioprogreso.hn.net/instante/damnificados-por-eta-e-iota-comienzan-a-salir-rumbo-a-estados-unidos/> <https://radioprogreso.hn.net/instante/sale-caravana-con-mas-300-migrantes-con-rumbo-estados-unidos/>
- [13] http://www.cne.hn/biblioteca/procesos_electorales/elecciones_2021_EP/CRONOGRAMA_PRIMARIAS_20210707.pdf <https://www.nodal.am/2020/09/honduras-cne-convoca-a-elecciones-primarias-en-marzo-de-2021-sin-una-nueva-ley-electoral/>
- [14] <https://proceso.hn/honduras-libre-nuevo-movimiento-que-apuesta-a-elecciones-internas/>
- [15] <https://contracorriente.red/2020/12/08/la-billetera-del-precandidato-a-la-presidencia-tito-asfura/>
- [16] <https://criterio.hn/honduras-segundo-pais-con-mayor-indice-de-impunidad-a-nivel-mundial/> ◀

“Como si la pandemia de Covi-19 no fuera suficiente, el país fue azotado, al cierre de 2020, por dos huracanes que dejaron daños millonarios en infraestructura”



CAPITOLIO, DEMOCRACIA Y ECONOMÍA

JUAN J PAZ Y MIÑO CEPEDA, DOCTOR EN HISTORIA CONTEMPORÁNEA POR LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA; COORDINADOR ACADÉMICO, EN ECUADOR, DE LA ASOCIACIÓN DE HISTORIADORES LATINOAMERICANOS Y DEL CARIBE/PRENSA LATINA

El año 2021 empezó con un acontecimiento de impacto mundial: la toma del Capitolio en Washington DC, el 6 de enero. Alentados por el presidente Donald Trump, quien se negó a reconocer los resultados electorales a favor de Joe Biden, los manifestantes que participaron en el cerco al Capitolio (tratados como “amigos” y “grandes patriotas”), pertenecen a diversas organizaciones: MAGA, QAnon, Proud Boys, Oath Keepers, Boogaloo Bois, Bundy Ranch, “Confederados” y otras agrupaciones neonazis, racistas, supremacistas blancos.

No lejos se hallan sus parientes políticos: Asociación Nacional del Rifle, Ku Klux Klan, Tea Party, White Power, Skin Heads, Metal Militia. También empresas y gigantes intereses económicos que han sostenido a Trump y sus acciones para recuperar la hegemonía mundial bajo la consigna del “America First”.

Entrevistado por la BBC, el profesor de la Universidad de Harvard, Steven Levitsky, sostuvo que lo sucedido responde a “4 años de desacreditar y deslegitimar la democracia” por parte del Partido Republicano y del presidente; lo ha juzgado como “un intento de autogolpe” y no ha podido menos que sentenciar: “la democracia estadounidense es un desastre” (<https://bbc.in/3nLQ9N7>).

En su libro *Capitalismo Progresista* (2020), el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz ha

verificado que a la crisis de la democracia estadounidense durante la “era Trump” acompañó una administración económica que descuidó la atención social, aunque profundizó el poder y la riqueza en una elite de multimillonarios y empresas, al compás de los supuestos del mercado libre.

Pero el “derrumbe” de la democracia y de la economía es el signo de los tiempos en todo el Continente. En América Latina el nuevo año se inicia sobre la grave herencia del 2020. La pandemia del coronavirus no sólo ha resultado un acontecimiento que alteró la vida cotidiana en todos los países, sino que ha cobijado el profundo desequilibrio de sus economías.

“La pandemia mostró que el neoliberalismo agravó las condiciones de vida de las mayorías y minó las bases de la democracia. Ha sido una calamidad”

De acuerdo con la Cepal, la región tendría así su peor crisis económica en 120 años, con un derrumbe promedio del 7.7 por ciento en el producto interno bruto, PIB (<https://bit.ly/3nP9oFj>) y, según el *Panorama Laboral 2020* de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la desocupación subirá al 10.6 por ciento, lo que significa que las personas que buscan empleo pasa a 30.1 millones, mientras que unos 23 millones salieron de la fuerza laboral temporalmente y han perdido sus empleos y sus ingresos (<https://bit.ly/3sCbMnAX>).

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) considera que en el 2021 habría una ligera recuperación de las economías, pero la OIT advierte que la tasa de desocupación podría subir hasta el 11.2 por ciento.

Sin embargo, mientras la propia Cepal argumenta que el problema está en el “modelo de desarrollo” demostrando en sus estudios que no es sostenible, resulta injusto, agrava las condiciones sociales y no genera desarrollo sino beneficios para pocos y con grave concentración de la riqueza, los gobiernos conservadores que hoy predominan en la mayoría de los países latinoamericanos encontraron en la pandemia del coronavirus el pretexto ideal para culpar del deterioro económico y social a un agente externo, inédito e imprevisto.

En forma más clara y directa, desde la perspectiva histórica continental, es necesario afirmar que el año de la pandemia demostró que los modelos de economía empresarial y neoliberal no sólo han agravado las condiciones de vida y trabajo de amplios sectores humanos, sino que minaron las bases de la democracia institucional.

De modo que lo sucedido en Estados Unidos es comparable con la conflictividad que se vive en América Latina, porque las derechas económicas, políticas, mediáticas, ideológicas, y hasta académicas, han logrado converger junto con el americanismo imperialista en la defensa del modelo de desarrollo que la Cepal cuestiona; es decir, en un tipo de economía que pretende empresarios y mercados dueños de los recursos de cada país, controladores del Estado y dominadores del conjunto de la sociedad.

Para la vida democrática ello ha significado que esas mismas derechas traten de impedir el ascenso histórico de las nuevas izquierdas sociales, identificadas con trabajadores, indígenas, campesinos, movimientos sociales, capas medias, sectores populares, medianos y pequeños empresarios, que buscan liquidar definitivamente los modelos neoliberales de las élites empresariales hegemónicas en la economía, y aspiran a economías sociales con Estados que impongan los intereses nacionales sobre los intereses capitalistas privados.

Esas nuevas fuerzas históricas marcan, hasta el momento, el ascenso social y político del Siglo XXI. Lograron expresarlas los gobiernos del primer ciclo progresista en América Latina, que han merecido numerosos estudios por la novedad de sus administraciones, sus logros sociales, sus triunfos electorales e incluso las posibilidades de cons-

trucción del “socialismo del Siglo XXI”.

Desde luego, el progresismo del primer ciclo ya demostró sus avances y también sus límites. El triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador, Alberto Fernández y Luis Arce en México, Argentina y Bolivia, respectivamente, ha permitido hablar de un segundo ciclo progresista. Bajo ese marco, en 2021 habrá elecciones presidenciales en Chile, Perú, Ecuador, Honduras y Nicaragua.

Al importante proceso constituyente de Chile ha acompañado el fortalecimiento de las izquierdas. En Ecuador, aunque bajo condiciones adversas, la candidatura de Andrés Aráuz encabeza todas las encuestas para las elecciones presiden-



ciales del 7 de febrero, en una coyuntura con 16 binomios y en la cual la polarización política se presenta con la candidatura del banquero Guillermo Lasso.

Pero sería un error histórico reducir las fuerzas del progresismo de nueva izquierda social al progresismo político-partidista y mucho menos a un candidato específico. La tendencia determinante de lo que va en el Siglo XXI rebasa la coyuntura, es un fenómeno de largo plazo y, sin duda, asegura los avances; pero enfrenta a fuerzas poderosas, que demostraron las capacidades que tienen para desmontar y perseguir todo aquello que pretenda “destruir” el capitalismo rentista de los modelos empresariales. ◀



LA PANDEMIA REFUERZA LA MISERIA DE LOS SECTORES EMPOBRECIDOS

SERGIO FERRARI/REBELIÓN

Mientras los más pobres del mundo necesitarán al menos una década para recuperarse de la crisis actual, los multimillonarios –las mil mayores fortunas del planeta– recuperaron en sólo 9 meses sus pérdidas momentáneas.

Así lo sostiene el informe *El virus de la desigualdad* publicado el 25 de enero (<https://www.oxfam.org/es/informes/el-virus-de-la-desigualdad>) por la organización no gubernamental internacional Oxfam. Aparece el mismo día en que el Foro de Davos comienza su edición virtual 2021. Denominado la Agenda de Davos, el Foro Económico Mundial se dio cita entre el 25 y el 29 de enero conectando a más de 1 mil participantes, representantes del mundo económico y del poder político.

El informe de Oxfam refuerza, acompaña y fundamenta, también, las múltiples reflexiones que a partir el pasado sábado 23 y hasta el 31 de enero promovió el Foro Social Mundial virtual. Según los organizadores, al 24 de enero, se registraban 7 mil 660 inscriptos de 134 países y 660 actividades previstas, en muchas de las cuales el tema central gira en torno al impacto de la pandemia y las alternativas sociales y populares para superarlo.

Oxfam hace parte de la Protesta Global para

luchar contra la desigualdad (<https://www.fightinequality.org/>), una alianza internacional que convocó a movilizaciones en diversos países de Asia, África y América Latina en la última semana de enero.

En su informe se pregunta cómo recomponer un mundo devastado por el coronavirus en el cual más de 2 millones de personas han perdido la vida, y cientos de millones se están viendo arrastradas a la pobreza. Y anticipa una

“No podemos volver adonde estábamos. La ciudadanía y los gobiernos deben responder a la urgente necesidad de construir un mundo más justo”

respuesta global: se ha demostrado que “es posible poner en marcha políticas transformadoras que antes de la crisis eran impensables. No hay vuelta atrás. No podemos

volver a donde estábamos. En lugar de ello, la ciudadanía y los gobiernos deben responder a la urgente necesidad de construir un mundo más justo y sostenible”, enfatiza. Con el convencimiento que la acción de los gobiernos es esencial para proteger la salud y los medios de vida, acota.

El diagnóstico pre-crisis, según la organización no gubernamental, evidencia “la fragilidad colectiva, así como la incapacidad de nuestra economía, profundamente desigual, de beneficiar al conjunto de la sociedad”. Y recuerda, por ejemplo, que según *Forbes*, entre marzo y diciembre del 2020, la fortuna de las 10 personas



DAVID MANRIQUE

más ricas del mundo (milmillonarias) creció en 540 mil millones de dólares. Se refiera a: Jeff Bezos, Elon Musk, Bernard Arnault (y familia), Bill Gates, Mark Zuckerberg, Larry Ellison, Warren Buffett, Zhong Shanshan, Larry Page y Mukesh Ambani.

Para la elaboración de *El virus de la desigualdad* se entrevistaron a 295 economistas de 79 países. El 87 por ciento de ellos comparte esta caracterización de la crisis y de las opciones futuras. Y concuerda con el pronóstico que la desigualdad de ingresos va a seguir creciendo en sus respectivos países a consecuencia de la crisis sanitaria.

La organización no gubernamental cita a Antonio Guterres, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con quien comparte el diagnóstico actual de la civilización humana. “Se ha comparado al Covid-19 con una radiografía que ha revelado fracturas en el frágil esqueleto de las sociedades

que hemos construido y que por doquier está sacando a la luz falacias y falsedades: la mentira de que los mercados libres pueden proporcionar asistencia sanitaria para todos; la ficción de que el trabajo de cuidados no remunerado no es trabajo; el engaño de que vivimos en un mundo post-racista; el mito de que todos estamos en el mismo barco. Pues si bien todos flotamos en el mismo mar, está claro que algunos navegan en superyates mientras otros se aferran a desechos flotantes”.

Datos desgarradores

Y la organización no gubernamental hace su propia descripción del planeta Tierra. Un mundo en el que casi la mitad de la humanidad tiene que sobrevivir con menos de 5.50 dólares al día, en el que, durante 40 años, el 1 por ciento más rico de la población ha duplicado los ingresos de



DAVID MANRIQUE

la mitad más pobre de la población mundial y, en el cual el último cuarto de siglo, el 1 por ciento más rico de la población ha generado el doble de emisiones de carbono que el 50 por ciento más pobre, agravando la destrucción provocada por el cambio climático.

Analizando datos esenciales, Oxfam afirma que la pandemia de Covid-19 tiene el potencial de aumentar la desigualdad económica en prácticamente todos los países del mundo al mismo tiempo, realidad hasta ahora desconocida –en cuanto a ese nivel de impacto global– desde hace más de un siglo, cuando se comenzaron a registrar datos esenciales.

El aumento de la desigualdad podría obligar a que se tarde, como mínimo, 14 veces más en reducir la pobreza –hasta el nivel previo a la pandemia– que el tiempo que han tardado las 1 mil personas más ricas del planeta –en su mayoría hombres blancos– en recuperar su riqueza.

“La recesión ya ha acabado para los más ricos”, afirma Oxfam. Desde el inicio de la pandemia, incluso, la fortuna de las 10 personas más ricas del mundo ha aumentado en medio billón de dólares, cifra que permitiría financiar sin problema alguna la vacuna universal contra la Covid-19. En paralelo, esta situación sanitaria desencadenó “la peor crisis laboral en más de 90 años, y cientos de millones de personas se encuentran subempleadas o sin trabajo”.

Una vez más las mujeres y los sectores marginalizados pagan los precios más altos de la crisis, afirma la organización no gubernamental coincidiendo con diversos informes que en los últimos meses han publicado organismos de las Naciones Unidas, como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por su sigla en inglés), el Programa de las Naciones Unidas para el De-

sarrollo (PNUD) etcétera. A nivel mundial, las mujeres están sobrerrepresentadas en trabajos mal remunerados y precarios, que han sido los que más se han visto afectados por la crisis de la Covid-19, enfatiza. Las mujeres constituyen aproximadamente el 70 por ciento de la fuerza laboral a nivel mundial en el ámbito de la salud y la atención social, empleos esenciales, pero a menudo mal remunerados que además las exponen a un mayor riesgo de contraer el virus.

En Brasil, por otra parte, las personas afrodescendientes tienen un 40 por ciento más de probabilidades de morir a causa del coronavirus que las personas blancas. En Estados Unidos, si la tasa de mortalidad de las personas de origen latino y afroamericano hubiese sido la misma que la de las personas blancas, se hubieran podido evitar 22 mil decesos de esos grupos.

Las zonas más pobres de países como España, Francia e India presentan tasas de infección y mortalidad más elevadas. En el caso de Inglaterra, las tasas de mortalidad de las regiones más pobres duplican a las de las zonas más ricas.

Un reciente estudio científico muestra que el impacto de la Covid-19 en los barrios más populares de la ciudad suiza de Ginebra —sede principal europea de las Naciones Unidas— es significativamente mayor que en las zonas de población rica de la misma ciudad. El estudio fue dirigido por el doctor Idris Guessous, responsable de uno de los servicios del Hospital ginebrino HUG. (<https://lecourrier.ch/2021/01/19/plus-dimpact-dans-les-quartiers-pauvres/>).

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) de las Naciones Unidas estima que, a causa de la pandemia, el número de personas en situación de hambre extrema alcanzaría los 270 millones de personas a finales de 2020, lo que supone un incremento del 82 por ciento con respecto de 2019. Con estas cifras, Oxfam calculó que la crisis provocada por la pandemia sería la causa de que murieran de hambre entre 6 mil y 12 mil personas al día a finales de 2020.

Perspectivas

En cuanto al futuro, Oxfam no duda en desarrollar su hipótesis rectora. La clave para lograr una rápida recuperación económica frente a la pandemia es la adopción de modelos económicos más justos.

Y tomar medidas que están a la mano y que solo exigen una clara voluntad política de los gobiernos. Por ejemplo, la imposición de un impuesto temporal sobre los beneficios excesivos obtenidos por las 32 multinacionales que mayor riqueza han acumulado desde que comenzara la crisis, hubiera permitido en 2020 una recaudación de 104 mil millones de dólares, cantidad suficiente para financiar prestaciones por desempleo para trabajadores y trabajadoras, así como para proporcionar apoyo económico al conjunto de niños, niñas y personas mayores de los países de renta media y baja.

Oxfam finaliza su informe proponiendo “Cinco pasos para conseguir un mundo mejor”:

mas igualdad; economías más humanas; libre de explotación y con seguridad de ingresos; donde los más ricos paguen los impuestos que les correspondan de manera justa; y se

priorice la seguridad climática.

Y sostiene que la construcción de “nuestro nuevo mundo debe basarse, en primer lugar, en una reducción radical y sostenida de la desigualdad”. Los gobiernos deben establecer metas concretas de reducción de la desigualdad, y sujetas a plazos precisos. El objetivo no debe limitarse a volver a los niveles de desigualdad previos a la crisis, sino que debe ir más allá para construir, con carácter de urgencia, un mundo más justo.

La lucha contra la desigualdad, incluyendo la desigualdad racial y de género, debe ser un elemento central del rescate económico y de las iniciativas de recuperación. Para las personas en situación de pobreza, las mujeres, las personas negras y personas afrodescendientes, los pueblos indígenas y demás comunidades históricamente excluidas y oprimidas de todo el mundo, esto significaría que por fin sus gobiernos darían prioridad a sus necesidades, concluye. ◀

“La lucha contra la desigualdad debe ser un elemento central del rescate económico y de las iniciativas de recuperación, luego de la pandemia”



“SU ESPERANZA DE UN FUTURO MEJOR NOS INSPIRA A TODOS”

YASMINE SHERIF, DIRECTORA DE LA EDUCACIÓN NO PUEDE ESPERAR/INTER PRESS SERVICE (IPS)

Nueva York, Estados Unidos. Mirando en retrospectiva al 2020, todos llevamos las cicatrices de un año devastador; aunque ninguno como el de los niños y niñas de todo el mundo. La pandemia de Covid-19 interrumpió la educación de más de 1 mil 600 millones de niños y jóvenes en todo el mundo y continúa haciéndolo.

También ha profundizado las desigualdades socioeconómicas y aumentado las inseguridades en todo el mundo, lo que afectó aún más la vida de las niñas y los niños en todas partes. Los conflictos continuos y prolongados, los desplazamientos forzados y el empeoramiento de la crisis climática no fueron menos indulgentes.

2020 fue, en resumen, un año brutal para los niños y los jóvenes del mundo, sobre todo para los 75 millones de niños y jóvenes cuya educación ya había sido interrumpida por emergencias y crisis prolongadas, y que ahora se ven doblemente afectados por la covid, y los impactos continúan hasta el día de hoy.

Es fundamental que nos tomemos un momento para reflexionar y conmemorar el Día Internacional de la Educación, el 24 de enero de 2021. Precisamente ahora es cuando debemos reforzar nuestro compromiso con la educación como herramienta fundamental para abrir un camino a seguir para todos los niños del mundo y su futuro, como se me recordó nuevamente en mis viajes recientes a Burkina Faso y el Líbano, ambos tambaleándose por múltiples crisis.

El conflicto y la inseguridad han expulsado a 1 millón de personas de sus hogares en Burkina Faso en los últimos años. Las instalaciones educativas

fueron objeto de ataques, maestros y estudiantes han sido atacados y los cierres de escuelas debido a los ataques se duplicaron de 2017 a 2019, interrumpiendo la educación de más de 400 mil niños.

Maestros y estudiantes de Kaya, la quinta ciudad más grande de Burkina Faso, donde muchas familias desplazadas han huido debido a la inseguridad y la violencia, me mostraron su trágica y desafiante realidad la semana pasada.

Las escuelas carecían gravemente de infraestructura para albergar a los estudiantes, faltaban materiales didácticos y no había agua ni saneamiento. Algunas aulas han triplicado su tamaño y ahora tienen más de 100 alumnos cada una.

Además de esto, la pandemia ocasionó el cierre de todas las escuelas durante varios meses en 2020. Actualmente, hay más de 2.6 millones de niños sin escolarizar y en las seis regiones más gravemente afectadas de Burkina Faso, la tasa de finalización de la escuela primaria es solo de 29 por ciento.

Sin embargo, incluso en estas escuelas mal equipadas y superpobladas, la esperanza y la positividad no han desaparecido y los maestros, los trabajadores y el entusiasmo incontenible de los propios estudiantes las mantienen vivas. Rodrigue Sawodogo, un niño de 9 años de edad desplazado por el conflicto, me dijo: “Me gustaría ser policía para salvar a mi país, porque quiero que todos vivan en paz”.

La crisis en Burkina Faso y en toda la región del Sahel central se encuentra entre las que se están deteriorando más rápidamente en el mundo. Podemos observar y no hacer nada en absoluto para ayudar a dar una oportunidad a niños como

Rodrigue de lograr sus sueños, o podemos actuar ahora mismo, invirtiendo en los niños y adolescentes para empoderarlos para que alcancen su máximo potencial y se conviertan en agentes de cambio positivos para sus comunidades.

La Educación No Puede Esperar (ECW, en inglés), el fondo mundial dedicado a la educación en emergencias y crisis prolongadas, en asociación con el gobierno de Burkina Faso, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, por su sigla en inglés) y la organización suiza Enfants du Monde, ha lanzado un programa plurianual que tiene como objetivo brindar educación a 800 mil niños y adolescentes en regiones del país afectadas por las crisis.

ECW brinda 11.1 millones de dólares iniciales para 3 años de financiación inicial. Pero eso no es suficiente. Hacemos un llamado a los donantes públicos y privados para que recauden otros 48 millones para llegar a todos los niños vulnerables.

Sólo unas semanas antes de mi visita a Burkina Faso, también viajé al Líbano en diciembre de 2020 para revisar las crisis educativas que enfrenta el país y abogar a nivel mundial por más fondos para facilitar el acceso a la educación para todos. El Líbano alberga la mayor proporción de refugiados por habitante de la población local en el mundo. Desde 1948 ha sido el hogar de una gran comunidad de refugiados palestinos, mientras que más de 1 millón de sirios han cruzado la frontera desde 2011.

Las crisis económicas, sanitarias y políticas agravadas están poniendo en peligro a más de 1 millón de niños y jóvenes en el Líbano. Según el Informe de resultados anuales de ECW de 2019, más de 630 mil niños sirios y 447 mil 400 niños libaneses vulnerables enfrentaron desafíos para acceder a la educación.

El sistema bancario se ha derrumbado y más de la mitad del país vive en la pobreza, según un informe de 2019 de la Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas para Asia Occidental. Y eso fue antes de que la Covid-19 profundizara la recesión económica y antes de que el puerto de Beirut fuera destrozado por una explosión catastrófica en agosto, matando a 200 personas, dejando a 300 mil sin hogar y dañando 140 escuelas.

Un mes después de la explosión, ECW aprobó

un fondo de emergencia de 1.5 millones de dólares para rehabilitar rápidamente 40 escuelas y ayudar a 30 mil niñas y niños a reanudar el aprendizaje.

Durante esta última misión, ECW trabajó junto con el gobierno libanés, organizaciones no gubernamentales locales y socios de las Naciones Unidas para crear programas de resiliencia de varios años en el Líbano. Estos tienen como objetivo cerrar la brecha entre las respuestas humanitarias a corto plazo y las intervenciones de desarrollo a más largo plazo.

Está a punto de lanzarse un programa similar de resiliencia plurianual para el sector de la educación en Burkina Faso, Malí y Níger. La educación es un sector de desarrollo y requiere inversiones sostenidas para salvar a millones de niñas del matrimonio precoz, el parto prematuro y a los niños de unirse a grupos terroristas armados.

Para hacerlo, ECW necesita los fondos necesarios para financiar completamente estos programas de varios años. Hacemos un llamamiento urgente a los donantes de los sectores público y privado para que ayuden a cerrar la brecha de financiación para proporcionar una educación inclusiva y de calidad tanto a los desplazados internos, a los niños refugiados como a las comunidades de acogida vulnerables.

Nuestro pasado no define nuestro futuro. La violencia, las inseguridades y las crisis que han definido 2020 sólo nos inspirarán a hacer más, a actuar más rápido y a construir una base más sólida y resistente. En este Día Internacional de la Educación, esperamos que pueda tomarse un momento para reflexionar sobre cómo la educación ha impactado en su vida. ¿Está listo para compartir su privilegio con otros menos afortunados?

Lo alentamos a pensar en los millones de niños en múltiples crisis y en cómo todos compartimos la responsabilidad de ayudar. Todos hemos sido afectados por la pandemia.

Compartimos una humanidad común y una experiencia humana común. Sirvamos a los más vulnerables, los niños y jóvenes afectados por crisis, y estemos allí para ellos cuando más nos necesiten. Dejemos que nuestras elecciones morales se traduzcan en apoyo financiero. Hagamos del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 una realidad para todos los más rezagados. ◀

ESTADOS UNIDOS, PANDEMIA Y ECONOMÍA

PRINCIPALES RIESGOS **A LA SEGURIDAD** **NACIONAL DE MÉXICO**



2021, aún más complicado que 2020. Las exigencias de Biden, una nueva cepa de coronavirus y la profundización de la crisis económica, las mayores preocupaciones de expertos en seguridad nacional

ZÓSIMO CAMACHO

Politólogos y sociólogos expertos en seguridad nacional coinciden en cinco amenazas y riesgos para México en el año que inicia, adicionales al de la enfermedad de jefe de Estado, Andrés Manuel López Obrador, quien dio positivo a Covid-19 el pasado domingo 24 de enero, con síntomas muy leves, de acuerdo con el reporte de la Secretaría de Salud.

Destacan un posible rebrote del SARS-CoV-2 con cepas que no cubran las vacunas y las probables tensiones en la relación con Estados Unidos. Los otros tres son el colapso de sectores económicos enteros, un proceso electoral violento, y las consecuencias de haber anclado, por décadas, toda la economía mexicana a la estadounidense cuando ésta se encuentra en declive frente a la china.

Otros riesgos que, por separado, también señalan los investigadores son los efectos y la profundización de una sequía que lleva 3 años y que podría llevar a la quiebra del sector agrícola; el narcotráfico y otras expresiones de la delincuencia organizada; la crisis migratoria; la conflictividad causada por los

megaproyectos, y el ascenso de movimientos de ultraderecha o de corte fascista.

Se trata de una agenda de 10 puntos que deberá hacer frente el gobierno de López Obrador, donde la salud del presidente también es un tema emergente de seguridad nacional. Lo anterior, luego de que el titular de Ejecutivo diera positivo a las pruebas de antígeno y PCR para detectar al virus SARS-Cov-2 en su organismo y ser diagnosticado con Covid-19.

El SARS-Cov-2, aún imbatible

Guillermo Garduño Valero, doctor en sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y especialista en América Latina por la Universidad de Pittsburgh, observa como principal riesgo a la seguridad nacional de México la pandemia de Covid-19.

En entrevista con *Contralínea*, el experto en seguridad nacional y Fuerzas Armadas advierte de los riesgos asociados al coronavirus que —hasta la última semana de enero— ha dejado más de 110 millones de personas contagiadas y 2 millones 300 mil muertes en el mundo, y más de 1 millón 800 mil casos positivos y 160 mil decesos en México, de acuerdo con los registros de la plataforma de estadísticas mundiales Worldometer.

Conferencista en el Colegio de la Defensa Nacional, la Escuela de Inteligencia para la Seguridad Nacional y el Centro de Estudios Superiores Navales, Garduño Valero advierte que el coronavirus no está aún bajo control en el mundo y todavía podría sorprender a la humanidad. Se refiere a las probables mutaciones que terminen por generar nuevas cepas más dañinas o mortales o que, incluso, las vacunas desarrolladas no funcionen ante estas probables nuevas versiones.

Adscrito a la Unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), el investigador dice que ninguna agencia de seguridad nacional del mundo descarta “un rebrote, que haya una nueva cepa que definitivamente sea más dañina y mortal que la anterior”. Una situación de ese tipo incrementaría de manera exponencial el número de muertos.

Un escenario como el anterior podría devenir en una pandemia muy lejos de que pueda ser con-

trolada por las instituciones del gobierno mexicano, observa por su parte Carlos Luis Sánchez y Sánchez. El doctor en investigación en ciencias sociales, con mención en ciencia política, por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), advierte de “una pandemia sin control”.

Más aún cuando, a su parecer, la estrategia de vacunación no es clara como no lo ha sido la de comunicación para detener los contagios. De hecho, considera “errático” el discurso de exhortar a que se use el cubrebocas cuando quien ostenta el mayor cargo del poder público, el presidente López Obrador, no lo usa.

De acuerdo con información de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el mundo no se ha registrado una nueva cepa del virus, es decir, una mutación de tal magnitud que se pueda considerar un organismo distinto. En tal caso, sería un nuevo virus no susceptible a las vacunas que se acaban de desarrollar.

Lo que sí hay circulando por todo el mundo son cientos de variantes, es decir de mutaciones del virus que no logran constituir una nueva cepa. A la OMS le preocupan en estos momentos tres variantes. La primera de ellas es la denominada B.1.1.7, detectada por primera vez en el Reino Unido. Presenta una cantidad elevada de mutaciones y se propaga con mayor rapidez que las demás variantes.

Una segunda variante motivo de preocupación es la denominada 1.351. Fue detectada en Sudáfrica por primera vez. Mantiene características similares a la del Reino Unido. La tercera surgió en Brasil, denominada P.1. Las mutaciones de esta variante podrían proporcionarle la ventaja de no ser reconocida por los anticuerpos.

Un rebrote que no pueda ser controlado y que coloque al mundo en una situación aún peor que la de marzo pasado está en las agendas de riesgo de todos los países. Y, a decir de Guillermo Garduño, sería desastroso para México, con un sistema sanitario insuficiente, agotado y, por momentos, a punto del colapso.

Pero Valeriano Ramírez Medina, doctor en ciencias políticas y sociales por la UNAM, dice que sobre México se cierne una crisis sanitaria no sólo por el nuevo coronavirus. El profesor-investigador adscrito al Centro de Estudios Políticos de la Fa-



MARIO JASSO/CUARTOSCUERO

► Desbordamiento de hospitales, en caso de la aparición de una nueva cepa de coronavirus

cultad de Ciencias Políticas y Sociales de la misma Universidad, señala que México vive una crisis sanitaria más allá de la pandemia. Explica que las enfermedades crónico degenerativas no se han atendido por varias décadas y ahora el sistema hospitalario resulta insuficiente.

El problema será mayor en los próximos meses porque se están postergando las citas médicas de los pacientes con hipertensión, diabetes, cáncer u otro tipo de enfermedades que necesitan un seguimiento adecuado. Por ello, señala que se debería de contar como muertes ocasionadas por la pandemia no son sólo las de personas que fenecen víctimas de Covid-19, sino de aquellas que mueren por otras afecciones y que “no se les dio cita en sus hospitales ni un seguimiento adecuado a los tratamientos”.

Explica que vendrán más problemas socio-sanitarios asociados a padecimientos no atendidos.

Relación con Estados Unidos

México se encuentra en un replanteamiento de su relación con la mayor potencia del mundo, su principal socio y con quien comparte una frontera de 3 mil 169 kilómetros: Estados Unidos. Por su parte, los estadounidenses se encuentran en un accidentado cambio de gobierno con la llegada de Joe Biden y la salida de Donald Trump.

Destaca en la nueva relación bilateral el alejamiento del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de las alianzas en materia de “seguridad” y “combate al narcotráfico” impulsadas por Estados Unidos con el acuerdo de las administraciones emanadas de los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI).

El actual presidente mexicano ha dicho que se enfocará en alianzas para el desarrollo antes que las de seguridad, que están en la agenda de Estados Unidos.

De hecho, para Victoria Livia Unzueta Reyes, doctora en estudios políticos europeos y euroamericanos, el problema “fundamental” para México en 2021 será el de la relación con Estados Unidos.

La especialista en seguridad y Fuerzas Armadas explica que el cambio de gobierno en Estados Unidos coloca a México en una situación complicada. Si bien con Trump la relación podía tener momentos de estridencia y tensión, se había alcanzado una estabilidad. Ahora Biden irá en sentido contrario a varias de las políticas desarrolladas por López Obrador.

Unzueta Reyes considera que, por ejemplo, el gobierno de Biden no verá con aprobación la desaparición de los órganos autónomos de la Administración Pública Federal mexicana que impulsaron los propios estadounidenses en nuestro país desde hace varios años, incluso alguno de ellos contemplados en el Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos y Canadá (Tmec).

Se refiere a instituciones como la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) o el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), criticados por el presidente de la República por onerosos e ineficientes. Y de los cuales ha ordenado una revisión para valorar su desaparición.

Luego de la primera conversación telefónica sostenida entre ambos presidentes, el 23 de enero, se disiparon las preocupaciones más graves. Aparentemente y, de acuerdo con lo informado por ambos gobiernos, coincidieron en los temas propuestos por México: atención a las causas de la migración en Centroamérica, respeto a los migrantes mexicanos en Estados Unidos y fortalecimiento de la alianza para el desarrollo.

Nada se dijo sobre el diferendo por el trabajo de la agencia antidrogas estadounidense (DEA, por su sigla en inglés), de la expulsión de los agentes armados y encubiertos que implica la reforma a la Ley de Seguridad Nacional ni sobre el replanteamiento de la cooperación en materia de narcotráfico.

Además, de estos temas que generan tensión, Livia Unzueta agrega uno más: los estadounidenses exigirán políticas de mayor financiamiento a la ciencia y contrarias al cambio climático. “El asunto es cómo vamos a cambiar todo esto, sin cambiar el Tratado, sin cambiar las relaciones con los Estados Unidos”.



► Colpaso económico, en 6 meses, si se mantienen las medidas del semáforo rojo

A este respecto, Valeriano Ramírez Medina prevé conflictos comerciales a causa de lo firmado en el Tmec. Los estadounidenses consideran que tienen un margen de intervención en México y podrían recurrir a sanciones en caso de que consideren que el gobierno mexicano no cumple con el tratado comercial.

Coincide el politólogo, sociólogo y comunicólogo Carlos Luis Sánchez y Sánchez. Si Donald Trump mostró poco interés en disposiciones del Tmec, Biden será “más quisquilloso con su cumplimiento”. Destaca, como ejemplo, las cláusulas para que los obreros mexicanos tengan más garantías del cumplimiento de sus derechos y la presencia de inspectores de ese país que verifiquen las condiciones laborales.

“Los demócratas estuvieron muy atentos de que se incorporaran estas cláusulas para proteger a los sindicatos estadounidenses, que están muy ligados al Partido Demócrata”, observa el también integrante



ANDREA MURCIA/CUARTOSCURO

del Consejo Técnico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.

Pero los retos de la relación con Estados Unidos se complican más cuando se tiene en cuenta que México atraviesa una crisis de generación de embajadores, cónsules y especialistas en las relaciones exteriores de México, advierte Livia Unzueta Reyes.

Autora de *Themis Armada: la construcción del Sistema de Justicia Militar* (Cámara de Diputados, 2019), explica que hoy se padecen las consecuencias del paulatino pero sostenido desmantelamiento de la diplomacia mexicana en los últimos 30 años. “Le queremos apostar ahora a la profesionalización de la diplomacia, pero no la hemos formado en los últimos 30 años. Lo que tenemos es una diplomacia que se formó antes del año 2000, en una circunstancia diferente a la que estamos viviendo”.

Garduño Valero explica que la relación del gobierno de López Obrador con el de Joe Biden ini-

cia con desencuentros. El mexicano fue visto por algunos sectores como alguien que prefería a Trump como vecino y “perdió”.

Aunque el fondo de las disputas con que inicia la saga López Obrador-Biden es una replantamiento en toda la relación bilateral, el presidente mexicano arrastra su “amistad” con Trump, observa.

Colapso económico

Otro de los mayores riesgos es el del colapso económico. Guillermo Garduño señala que se trata de una derivación de la propia pandemia. Observa que es imprescindible que se reactive la economía, pues 6 meses más de paro económico “traerían colapsos extremadamente fuertes”.

El especialista explica que aún no se ha tocado fondo en materia económica de la emergencia sanitaria. Advierte que medio año más con medidas de contención como las que implican los colores rojo y naranja del semáforo sanitario provocaría una crisis que no podrá superarse en años o décadas.

Los colores rojo y naranja del semáforo sanitario implican que sólo se pueden realizar las actividades económicas esenciales. Lo anterior para garantizar el distanciamiento social y frenar la transmisión del virus de persona a persona. Pero los estragos en todo el mundo se han saldado con un crecimiento mundial negativo superior al 7 por ciento en 2020. De acuerdo con cifras preliminares del Fondo Monetario Internacional, México habría caído alrededor del 9 por ciento el año pasado.

Un escenario, en el que se tenga que mantener el cierre económico por otros 6 meses sería “desastroso”, observa Garduño Valero. En primer lugar, se presentaría una insuficiencia de la recaudación de impuestos, “porque no hay de dónde recaudar”; segundo, una inflación que sería imparable; tercero, el colapso del aparato productivo, particularmente del sector de exportaciones y, “algo que es más grave”, el colapso del sector enfocado a satisfacer las necesidades del mercado interno. No habría posibilidades de adquirir lo necesario ni siquiera a altos precios, explica.

Advierte que los procesos de inversión en todo el mundo no se vislumbran que vayan a ser de manera inmediata.

Por su parte, Valeriano Ramírez señala que se trata de un problema mundial pero que, por las ca-



► Proceso electoral, factor de desestabilización

racterísticas de México, en este país podía presentarse una crisis más profunda. Por ello, considera que México debe poner en marcha un programa de incentivos a la inversión que genere empleos.

Victoria Unzueta explica que México es más vulnerable a las crisis económicas, pues durante las últimas décadas generó una relación casi exclusiva y excluyente con Estados Unidos. Ahora paga los costos de haberse alejado de Latinoamérica. Sería más fácil para el país responder a la crisis con relaciones diversificadas y, específicamente, con América Latina podría haber generado desarrollo comercial y económico, pero también científico, cultural y de intercambio de profesionistas que hoy sería muy valioso.

Proceso electoral polarizado

La disputa política se recrudecerá, pues 2021 es

año de contiendas electorales. Guillermo Garduño observa una primera condición que hacen de las elecciones de este año uno de los riesgos a la seguridad nacional. Se trata de las flaquezas del partido en el gobierno y el que mayor número de votantes tiene: el Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Advierte que Morena no goza de madurez, capacidad de organización y, particularmente, de disciplina. “Lo que veo es que los peores enemigos de Morena están dentro de Morena”. Las rupturas se han multiplicado sólo porque todos quieren ser candidatos. Los ganadores no tienen voluntad de negociar y los perdedores no aceptan perder. Todos se creen con el derecho de aparecer en las papeletas.

Mario Delgado llegó a la presidencia nacional de Morena el 5 de noviembre pasado, luego de un ríspido proceso al interior del partido y bajo acusaciones de fraude. Lo que siguió fueron las desig-

naciones para las candidaturas al gobierno de los estados que estarán en disputa electoral. Ninguno de los procesos ha sido terso.

Este tipo de rupturas no benefician a nadie, ni siquiera a la oposición, pero terminan perjudicando todo el sistema político. Explica que la incapacidad de negociar de Morena podría generar una parálisis política, gane o pierda. Además, en estas elecciones ya estará, de manera subyacente, una lucha por ver quién sucederá a López Obrador en la Presidencia de la República.

El próximo 6 de junio se celebrarán en México elecciones federales para renovar a una de las Cámaras del Poder Legislativo, la de Diputados. Estarán en juego 300 diputaciones por el cargo de mayoría relativa y 200 por el de representación proporcional.

Además, 15 estados de la República elegirán gobernador: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas. En 29 se renovarán los ayuntamientos municipales y en la Ciudad de México se elegirán nuevos alcaldes.

Ramírez Medina observa que el siguiente proceso electoral podría tener riesgos de violencia ante la polarización de la sociedad. “Esa polarización va a impactar en el tejido social. Ya no hay discurso hacia el medio, ya no hay puentes discursivos sino ‘eres mi amigo o eres mi enemigo’, no hay más.”

Tanto Garduño Valero como Ramírez Medina advierten que el electorado votó en 2018 por Andrés Manuel López Obrador, no por Morena. Y López Obrador no estará ahora en las papeletas. Se entiende que se trata de su partido y que sus simpatizantes lo apoyarán, pero no será la misma historia.

“Una crisis política sería finalmente de credibilidad. Antes ya teníamos una crisis de confianza hacia los partidos políticos y los gobernantes. La gente ahora le quiere creer al presidente. Las campañas buscarán socavar la credibilidad de unos y otros y eso, finalmente, terminará por acabar con la escasa credibilidad de todo el sistema político”, explica Valeriano Ramírez.

El riesgo es que nadie pueda gobernar, expone Guillermo Garduño. La oposición, reunida en el bloque del PRI, PAN y de la Revolución Democrá-

tica, no puede articular un programa de gobierno.

“Frente a esas circunstancias veríamos la aparición probablemente de un [Girolamo] Savonarola, levantado por la derecha y que la gente vaya corriendo en torno a él, en cuyo caso todos serían perdedores. Una cosa de esa naturaleza no le conviene a nadie, pero es posible. Así llegaron Hitler, Stalin y no son los mejores escenarios.”

Caída de Estados Unidos ante China

El otro riesgo a la seguridad nacional de México tiene que ver con una situación geopolítica de alcance global. Los investigadores se refieren al ascenso de China como potencia hegemónica mundial. El problema para México son las decisiones y acciones estadounidenses ante tal hecho.

El primero es que Estados Unidos arrastre a México en su caída. El segundo, que los estadounidenses presionen a los mexicanos e intervengan en sus decisiones soberanas para tratar de posicionarse en temas como el energético y otros de tipo estratégico. Vería a los recursos mexicanos como propios para enfrentarse al hegemonía emergente.

“En la medida en que nos afiliamos demasiado con Estados Unidos, nos cerramos puertas en otros ámbitos”, reconoce Garduño Valero. No es que México deba enemistarse con su vecino del norte o que renuncie a su posición geográfica, pero no puede adoptar una posición de subordinado, como si no tuviera una agenda e intereses nacionales propios.

Victoria Livia Unzueta coincide en que “el problema fundamental no está en que tengamos una relación con Estados Unidos, sino en que es la única relación que tenemos”.

Advierte que el mundo se está “bipolarizando”. Lo que México debe hacer es diversificar sus relaciones. “Pero no lo estamos haciendo y eso es un problema que tenemos que afrontar en términos económicos”.

Sin embargo, estrechar la relación con China también implica un riesgo inmediato, explica Carlos Luis Sánchez y Sánchez. El politólogo señala que tal intención provocaría, de manera inmediata, que “la relación con Estados Unidos se viera muy dañada”.

Y es que, dice, por su parte, Valeriano Ramírez

Medina, las inversiones tanto de Estados Unidos como de China vendrán condicionadas y, por lo tanto, no necesariamente va a haber generación de empleos. “Van a tratar de cooptar el mercado abatiendo la industria local”.

Guillermo Garduño Valero, estudioso de la seguridad nacional desde hace décadas y autor, entre una decena de libros, de *Derechos humanos y seguridad en democracia* (Universidad de Guadalajara, 2017), advierte de otros riesgos que deben atenderse puntualmente.

Señala que se acaba el tiempo para los megaproyectos de la presente administración. Tampoco hay recursos suficientes para ellos. En específico se refiere al Tren Maya y al Corredor Transistmico.

El otro problema es el de la sequía. “México está padeciendo la sequía más fuerte del siglo”. Lo anterior podría generar la quiebra del sector agrícola. “Va a crear escenarios tremendos, inconformidades extremadamente fuertes”.

Crimen, movimientos sociales y movimientos armados

Por parte Valeriano Ramírez Medina señala que el crimen organizado sigue ahí, con poder de fuego y capacidad de desestabilizar al país. Están fortalecido y siguen peleando las *plazas*. Pero el riesgo mayor es que hagan alianzas con grupos políticos de cara a las elecciones.

Especialista en movimientos sociales, Ramírez Medina señala que los movimientos armados son otro sector no conforme con la 4T. Dice que tendrán actividad, no necesariamente armada, en este año. Se refiere al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el Ejército Popular Revolucionario, el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente y otros.

Considera que crisis como la actual provocan el engrosamiento de las filas guerrilleras. Y es que, según su reflexión, la opción para los que quedan fuera de desarrollo económico “si no es el crimen organizado, son estos grupos armados”.

Aclara que más que representar un riesgo a la seguridad nacional, estos grupos son riesgos de inestabilidad política y social.

Carlos Luis Sánchez y Sánchez dice, por su parte, que si bien la mayoría de los movimientos armados no apoyaron a López Obrador, tampoco



► López Obrador-Biden, menos estridencia pero más conflicto

representan un riesgo para su gobierno. “Veo muy marginal el impacto que puedan tener, a menos que radicalice su discurso y sus acciones. Perdieron esta proyección mediática”.

Migración y Consejo de Seguridad de la ONU

Victoria Livia Unzueta Reyes destaca los riesgos de carácter externo. “Me preocupa el asunto migratorio. Y no sólo en términos de lo que ha significado en los últimos 2 años la migración centroamericana, las caravanas migrantes que no habíamos visto. Se va a complicar en términos económicos y de violencia”.

Se refiere también a la situación de los migrantes mexicanos que ya están en Estados Unidos. “Tenemos



que ser conscientes de que los gobiernos que han sido más duros en términos migratorios han sido los demócratas”, aunque en su discurso sean más amables.

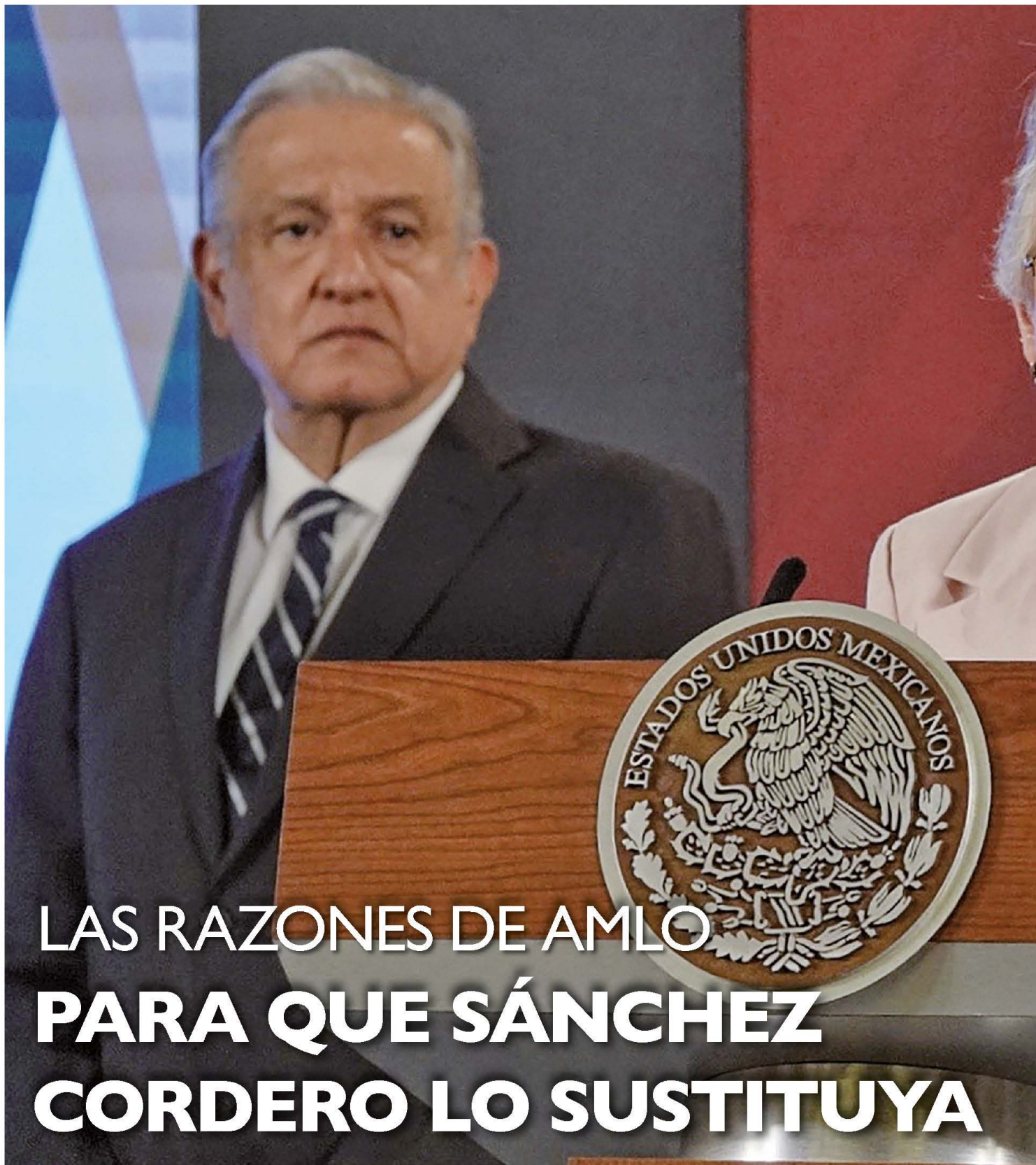
La otra situación es que México empieza el año con un nuevo lugar en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. Se trata de una responsabilidad que implica mayores riesgos que beneficios, considera. De entrada, colocará a México en una situación de mayor enfrentamiento o subordinación a Estados Unidos, no habrá puntos intermedios.

“Cuando estaban impulsando la candidatura de México fue justo en el momento en que Trump estaba pidiendo la actuación de la Guardia Nacional para detener las caravanas de migrantes. Ahora es mucho más complicado dada la frialdad entre Biden y López Obrador y la confrontación por el trabajo de la DEA en México.” ◀

PRINCIPALES RIESGOS Y AMENAZAS A LA SEGURIDAD NACIONAL DE MÉXICO 2021*

1. La pandemia de Covid-19
Rebote o aparición de nueva cepa más dañina o mortal, resistente a las vacunas desarrolladas; desatención de las enfermedades crónico-degenerativas
2. Paro económico
Crisis por colapso de sectores; insuficiencia de la recaudación; inflación creciente; caída de las exportaciones; imposibilidad de satisfacer el mercado interno.
3. Relación con Estados Unidos
Confrontación por interpretaciones distintas del Tmec; replanteamiento de la colaboración en materia de seguridad; represalias por expulsión de los agentes encubiertos
4. Proceso electoral
Indisciplina e incapacidad de Morena; intervención del presidente; estancamiento legislativo; violencia política; polarización social
5. Disputa geopolítica
Estados Unidos-China
Condicionamiento de inversiones; presión para
6. Sequía
Quiebra del sector agrícola; hambruna
7. Megaproyectos
Conflictividad social por el Tren Maya, el Corredor Tansísmico y el Plan Integral Morelos; falta de tiempo y recursos para los tres citados y para el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México y la nueva refinería
8. Narcotráfico
Alianza de grupos criminales con candidatos en las elecciones próximas; mayores confrontaciones entre cárteles; atentados
9. Crisis migratoria
Incapacidad de atender las caravanas de centroamericanos que atraviesan México y deportación de mexicanos desde Estados Unidos; caída de remesas
10. Conformación de grupos de corte fascista o de ultraderecha
Aparición de opciones políticas autoritarias, misóginas

* Escenarios de riesgo, elaborados con información de Guillermo Garduño Valero, Valeriano Ramírez Medina, Victoria Livia Unzueta Reyes y Carlos Luis Sánchez y Sánchez



LAS RAZONES DE AMLO PARA QUE SÁNCHEZ CORDERO LO SUSTITUYA



Expertos en derecho constitucional explican que si —por cualquier motivo— el presidente de la República estuviera inconsciente más de 60 días, el Congreso se debe erigir en Colegio Electoral y nombrar un mandatario sustituto. Antes de ese plazo, quien asumiría las funciones de jefe del Ejecutivo es la titular de la Segob

JORDANA GONZÁLEZ Y ÉRIKA RAMÍREZ

Al conocer el resultado positivo de la prueba de Covid-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador nombró a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, su sustituta en las conferencias de prensa matutinas hasta que él se restablezca y pueda regresar de su obligado confinamiento.

Ésa no fue cualquier decisión sobre una de las tareas más importantes que se ha impuesto el presidente de la República para mantener ampliamente informada a la población sobre la actuación del gobierno, y que ha resultado de enorme interés para millones de mexicanos, pues como jefe de Estado sabe perfectamente la ruta que tiene que seguir el país en caso de que no pudiera concluir su mandato o de que éste se viera interrumpido un corto tiempo (un máximo de 60 días inconsciente) por cuestiones de salud (ambos escenarios no deseados, por supuesto). Ello, en el contexto de que ha sido afectado por esta terrible enfermedad que

aqueja a millones de personas en todo el mundo, y aún cuando en los primeros días ha presentado síntomas leves y se encuentra en pleno ejercicio de sus funciones.

Y es que de acuerdo con la Constitución Mexicana y las leyes reglamentarias del servicio público, ante la ausencia del jefe del Ejecutivo (por cualquier motivo), quien asumiría

“En el supuesto que el presidente permaneciera incapacitado por más de 60 días, el Congreso tendría que erigirse en Colegio Electoral”

la Presidencia interina es la persona que en ese momento esté a cargo de la Secretaría de Gobernación, que en este caso es la doctora Sánchez Cordero. Y el Congreso tiene 60 días para elegir un primer mandatario sustituto que permita concluir el sexenio, explican a *Contralinea* especialistas en derecho constitucional.

Eso mismo aplica en un escenario en que el presidente de la República, por cuestiones de salud, permaneciera inconsciente o no pudiera atender los asuntos de Estado por tratamientos médicos que le implicaran perder la consciencia por un plazo superior a 2 meses, como podría ser una intubación. En principio, quien asumiría el cargo automáticamente, y de manera interina, sería la secretaria de Gobernación.

Por lo anterior, el presidente López Obrador ha previsto, como buen político que es, designar a la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero para sustituirlo con la importante tarea de informar todos los días a los mexicanos de los asuntos correspondientes a la administración pública federal.

Sin embargo, los especialistas en derecho constitucional aclaran que la interpretación de la Constitución correspondería hacerlo a

la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El máximo órgano de justicia sería el que determinaría dichos plazos. Ello, porque no hay una disposición textual ni en la Constitución ni en alguna ley reglamentaria: lo único que se precisa es que el interinato se extendería hasta un máximo de 60 días, y si el presidente no recobra en ese lapso sus funciones, se deberá elegir a un sustituto.

En el supuesto de que el presidente Andrés Manuel López Obrador permaneciera incapacitado por más de 60 días para realizar sus actividades como jefe de Estado —en este caso por una complicación de la Covid-19 que padece en estos momentos—, el Congreso de la Unión tendría que erigirse como Colegio Electoral para designar a un presidente sustituto. Sin embargo, sería un escenario “complicado”, porque no hay una ley reglamentaria que dicte el proceder para conformar la terna y seleccionar al indicado, explica el abogado constitucionalista Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

De acuerdo con la más reciente reforma al artículo 84 constitucional —ilustra—, las ausencias de carácter interino deben ser cubiertas por quien esté a cargo de la Secretaría de Gobernación. Es decir, la ministra en retiro Sánchez Cordero quedaría al frente, indica el también doctor en derecho por la Universidad de Salamanca.

Y si Andrés Manuel López Obrador se viera incapacitado para cubrir su cargo (por estar sedado, intubado o inconsciente), el artículo 85 establece que puede pedir una licencia por un plazo de hasta 60 días. Si pasa el tiempo y la licencia se hace definitiva, “quizá se optaría por una licencia formal para que la secretaria de Gobernación asuma formalmente”.

El también doctor en derecho por la UNAM precisa: “Olga Sánchez Cordero quedaría al frente de las funciones de primer mandatario en caso de que el presidente formalmente pidiera la licencia. Ahorita está encargada del despacho pero —aclara el doctor— fundamentalmente el presidente sigue trabajando. Está



SAÚL LÓPEZ/CUARTOSCURO

► Poder Legislativo, por reglamentar artículo 84 de la Constitución

en su casa: no está inhabilitado para atender las funciones de jefe de Estado y jefe de gobierno”.

No obstante, en un escenario donde el funcionario faltara de manera absoluta, Sánchez Cordero ocuparía de manera formal el cargo como presidenta. “La Constitución le da por lo menos estabilidad al país”, explica el académico, pero sólo en lo que el Congreso discute y designa a quién terminaría los años restantes del gobierno lpezobradorista.

El doctor Contreras Bustamante explica que hasta ahora nunca se ha tenido que invocar dichos artículos constitucionales. Siempre han estado en un lugar de uso hipotético. Pero “no deja de ser un problema constitucional importante”, observa, porque al nunca ser usados, no hay una ley reglamentaria que de-

termine “cómo va a ser la terna, de dónde saldrán los candidatos que se van a votar. Nada, simplemente está puesto en la Constitución”.

Sin embargo, hay confianza en que el presidente se recupere y se restablezca pronto en sus tareas, “para que no tengamos que padecer con estas cuestiones”. Implicaría un gran problema, aunque pueda leerse sencillo con la situación actual del Congreso: “que se pusieran de acuerdo los diputados y los senadores del partido en el gobierno”.

Con matices, coincide el maestro en derecho por la UNAM José Alejandro González Reyna. El especialista en derecho constitucional señala que en caso de que el presidente entrara en una condición de gravedad o inconsciencia a causa de la Covid-19 que padece, el Congreso de la Unión tendría que iniciar los procesos corres-



► Suprema Corte de Justicia de la Nación, encargada de interpretar la Constitución en caso de que falte, por incapacidad y no por fallecimiento, el titular de Poder Ejecutivo

pondientes para nombrar un presidente interino. En tanto esto no ocurra, será la titular de la Secretaría de Gobernación quien asumiría el cargo del primer mandatario.

Indica que el artículo 84 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dicta que: “en caso de falta absoluta del presidente de la República, en tanto el Congreso nombra al presidente interino o sustituto, lo que deberá ocurrir en un término no mayor a 60 días, el secretario de Gobernación asumirá provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo”.

El maestro González Reyna destaca que como el primer mandatario ya cumplió 2 años en el cargo, el procedimiento que se activa es que el Congreso de la Unión se erige en Colegio Electoral, “que es el que va a nombrar por un voto secreto y de mayoría absoluta al pre-

sidente interino y que es el que continuaría en las funciones de presidente de la República”.

Descarta que quien esté al frente de Gobernación pudiera seguir en el desempeño de presidente sustituto luego de haber sido presidente interino, pues “la Constitución dice que cualquier persona que haya asumido el cargo de presidente de la República en su momento no puede repetir. Tendría que nombrarse a otro o establecerse una propuesta diferente”.

El académico universitario dice que en el panorama más dramático, en caso del fallecimiento del titular del Ejecutivo, “se consideraría una falta absoluta del presidente. En este caso, caeríamos justo en la idea de que se tendría que nombrar un presidente sustituto”.

El artículo 84 de la Constitución expone que: “quien ocupe provisionalmente la Presi-

dencia no podrá remover o designar a los secretarios de Estado sin autorización previa de la Cámara de Senadores. Asimismo, entregará al Congreso de la Unión un informe de labores en un plazo no mayor a 10 días, contados a partir del momento en que termine su encargo”.

Precisa que cuando la falta absoluta del presidente ocurriese en los 2 primeros años del periodo respectivo, la Constitución establece que “si el Congreso de la Unión se encontrase en sesiones y concurriendo, cuando menos, las dos terceras partes del número total de los miembros de cada Cámara, se constituirá inmediatamente en Colegio Electoral y nombraría en escrutinio secreto y por mayoría absoluta de votos, un presidente interino, en los términos que disponga la Ley del Congreso. El mismo Congreso expedirá, dentro de los 10 días siguientes a dicho nombramiento, la convocatoria para la elección del presidente que deba concluir el periodo respectivo, debiendo mediar entre la fecha de la convocatoria y la que se señale para la realización de la jornada electoral, un plazo no menor de 7 meses ni mayor de 9. El así electo iniciará su encargo y rendirá protesta ante el Congreso 7 días después de concluido el proceso electoral.

“Si el Congreso no estuviere en sesiones, la Comisión Permanente lo convocará inmediatamente a sesiones extraordinarias para que se constituya en Colegio Electoral, nombre un presidente interino y expida la convocatoria a elecciones presidenciales en los términos del párrafo anterior. Cuando la falta absoluta del presidente ocurriese en los 4 últimos años del periodo respectivo, si el Congreso de la Unión se encontrase en sesiones, designará al presidente sustituto que deberá concluir el periodo, siguiendo, en lo conducente, el mismo procedimiento que en el caso del presidente interino”.

El constitucionalista González Reyna añade que para que se lleven a cabo estas condiciones, el Congreso de la Unión se basa en los artículos 9 y 10 de la Ley Orgánica, y cita:

Artículo 9: “I. En los términos del primer párrafo del artículo 84 de la Constitución, el Congreso General, constituido en Colegio Electoral, con la concurrencia de por lo

menos las dos terceras partes del total de sus miembros, nombrará presidente interino de la República. El nombramiento se otorgará en escrutinio secreto y por mayoría de votos de los miembros presentes. II. El Congreso emitirá la convocatoria a elecciones en un plazo no mayor de diez días naturales, contados a partir del siguiente al del nombramiento del

“Quien ocupe provisionalmente la Presidencia no podrá remover o designar a los secretarios de Estado sin autorización del Senado”

presidente interino. III. Esta convocatoria no podrá ser vetada por el presidente interino.”

Artículo 10. “I. En el caso de que llegada la fecha de comienzo del periodo presidencial no se presentase el presidente electo, o la elección no estuviere hecha y declarada el primero de diciembre, cesará en su ejercicio el presidente cuyo periodo haya concluido y ocupará el cargo con carácter de interino el ciudadano que para tal fin designe el Congreso de la Unión, o en su falta, con el carácter de provisional, el que designe la Comisión Permanente, observándose lo dispuesto en el artículo anterior. II. En los casos de falta temporal del presidente de la República, el Congreso de la Unión, en sesión conjunta, o la Comisión Permanente en su caso, designará un Presidente interino por el tiempo que dure la falta. “I. Cuando dicha falta sea por más de 30 días y el Congreso no estuviere reunido, la Comisión Permanente convocará a sesiones extraordinarias para que éste resuelva sobre la licencia y nombre, conforme lo dispuesto por el artículo anterior y los dos primeros párrafos de este artículo, al presidente interino. De igual forma se procederá en el caso de que la falta temporal se convierta en absoluta”. ◀

A photograph of a woman from the waist down, wearing a bright red, shiny, satin-like dress. She is covering her genital area with both hands, which are clasped together. The background is a plain, light grey color.

ACABAR CON LA MUTILACIÓN
GENITAL FEMENINA
PASA PORQUE DEJE
DE SER UN SECRETO



En 92 países de los cinco Continentes se comete contra mujeres la ablación del clítoris.

En 41 de ellos ni siquiera está prohibido. Sociedades profundamente machistas hacen posible que subsista una práctica anterior al islam y al cristianismo pero que ahora se justifica en supuestos postulados de estas religiones

MARIYA SALIM/INTER PRESS SERVICE

Nueva Delhi, India. Las sobrevivientes de ablación o mutilación genital femenina están decididas a compartir sus historias para poner fin a esta práctica, aunque enfrentan el ostracismo de sus comunidades.

Masooma Ranalvi, sobreviviente de la ablación genital, es fundadora de We Speak Out (Nosotras Hablamos), una organización comprometida con la eliminación de la práctica que también se realiza en varias comunidades de India, en especial en las de los dawoodi bohras, seguidores del ismailismo, una corriente religiosa del islamismo chiíta.

Hablar en contra de la mutilación genital femenina no ha sido fácil para Ranalvi y muchas otras mujeres que se han atrevido a revivir el recuerdo de su infancia, cuando fueron víctimas del *khافت*, como se llama en indi al “corte” genital. Pero consideran necesario compartir públicamente su traumática experiencia, para que las generaciones posteriores no deban sufrirla.

“Existe una cultura del miedo en torno a este

tema, una cultura del silencio. Muchas no se pronuncian porque hay boicots sociales contra quienes lo hacen, declarados extraoficialmente y ejecutados de hecho por la comunidad”, dice Ranalvi en entrevista con IPS.

La activista, una de las lideresas de la lucha legal y social contra la mutilación genital femenina en India y el mundo, detalló que “hace sólo

“En Asia no hay un solo país que tenga una ley promulgada para prohibir la práctica contra los derechos de las personas del sexo femenino”

20 años se negaba incluso el derecho al entierro (según los ritos de la corriente musulmana) a aquellos que se atrevían a disentir de la ablación o hablaban contra ella”.

Según un estudio realizado por We Speak Out, de los 2 millones de personas que integran la comunidad bohra en India y su diáspora, entre 75 y 80 por ciento de las mujeres aproximadamente están sujetas a la ablación o mutilación genital femenina.

Renalvi también se sumó a una iniciativa judicial de la abogada Sunita Tiwari para abolir la mutilación genital femenina, que hasta entonces el gobierno de India negaba que se realizase en el país. Tiwari presentó en 2017 un Litigio de Interés Público ante la Corte Suprema de India en demanda de que se prohíba la ablación en la comunidad dwoodi bohra, aún sin sentenciar.

La práctica de la mutilación genital femenina se perpetuó entre esta minoría musulmana india en buena parte gracias al secreto en torno a ella, como sucede en otras partes del mundo. Pero ahora se habla de ella cada vez más y especialmente lo hacen las sobrevivientes.

La mutilación genital femenina implica la extirpación parcial o total de los genitales femeninos externos u otras lesiones de los órganos

genitales femeninos por razones no médicas. La religión, la cultura y la tradición se citan a menudo como argumentos para esta práctica atávica y patriarcal.

En alrededor de 92 países de todo el mundo se practica la ablación del clítoris o mutilación genital femenina. Y de ese total, 51 países la han prohibido expresamente en sus leyes nacionales de una forma u otra.

En Asia, sin embargo, no hay un solo país que tenga una ley promulgada para prohibir la práctica contra los derechos de las humanas, aunque se sabe que se prolonga en forma habitual en al menos India, Indonesia y Malasia.

En Estados Unidos, Mariya Taher cofundó Sahiyo, una unión de mujeres por la proscripción de la mutilación genital femenina a nivel mundial y entre la comunidad bohra. Ella es una sobreviviente y participó activamente leyes en la abolición de la práctica en el estado Massachusetts.

“Tardamos 5 años en lograrlo, pero en agosto de 2020 logramos aprobar una ley al respecto. Actualmente trabajo con un grupo en Connecticut para aprobar una ley allí también”, explicó a IPS desde Boston.

En Estados Unidos, detalló, sí existe una ley federal contra la mutilación genital femenina, pero para que se haga efectiva se requieren también normas a nivel de los estados y hasta ahora sólo 39 de los 50 territorios federales han incorporado la abolición a su legislación, detalló Taher.

Aarefa Johari, periodista y cofundadora de Sahiyo, agregó que “la promulgación de una legislación contra la ablación/mutilación genital femenina debe ser precedida, acompañada y luego monitoreada por un activismo comunitario intenso y fuerte. Necesita educación, concienciación y diálogo”.

También sobreviviente de la ablación, Johari cree que “una ley contra la mutilación genital femenina es vital como elemento disuasorio y como medio para aclarar la postura del Estado sobre la práctica”.

Pero subrayó que “las leyes por sí solas no pueden poner fin a normas sociales profundamente arraigadas”.



► 6 de Febrero, contra la mutilación genital femenina

A juicio de Johari se requiere, además, un compromiso a largo plazo y una intervención legal para cambiar la mentalidad de la comunidad donde se mantiene la práctica.

Dado que muchos dentro de las diversas comunidades usan la religión para justificar la práctica, es importante señalar que ha habido una extensa investigación y escritos sobre el tema por parte de eruditos islámicos que concluyeron que la mutilación genital femenina no es islámica.

Ese descrédito se basó en los textos coránicos y las colecciones de costumbres y tradiciones con base en dichos y acciones del profeta Mahoma, denominados “hadices”.

La organización internacional Karamah Mujeres Musulmanas Abogadas por los Derechos Humanos también concluyó en un estudio que la dañina práctica contra la integridad física y

emocional de las mujeres carece totalmente de un “mandato religioso”.

“El corán no proporciona un solo verso o instancia en la que el *khitan* femenino [mutiación genita femenina] en que se mencione como obligatorio o deseable. Además, contrariamente a la creencia generalizada, no existe un único hadiz auténtico del Profeta que requiera el *khitan* femenino”, indica el informe de la organización que actúa en Europa, Norteamérica, Medio Oriente y Norte de África.

Cuando tenía 10 años, la tía de Munira (un nombre ficticio para su protección) la tomó de la mano y la llevó al sótano de su casa vacía un domingo por la noche prometiéndole jugar un juego.

Poco sabía Munira que el premio de este supuesto juego, donde se le pidió que se acostara en una mesa con la ropa interior baja y los labios



123RF

► Otro crimen del patriarcado

sellados por su tía para evitar que se escucharan sus gritos, terminaría con cicatrices de por vida. Fue cortada por una persona de su propia familia y este recuerdo resuena en su mente, como en la mayoría de las víctimas de la ablación.

“Nunca es fácil para alguien que ha experimentado alguna forma de violencia de género compartir su historia. Mi proceso tomó años y me implicó primero aprender sobre él y luego escribir sobre él. Lo primero que escribí fue para el proyecto de imaginar la igualdad”, explica Taher.

Asegura que le tomó muchos años “sentirme cómoda para compartirlo frente a una cámara o para ser entrevistada por los medios sobre mi experiencia. Pero incluso cuando me sentí cómoda, experimenté muchas reacciones dolorosas al hacerlo”.

Además, al hacer público su caso en su en-

torno inmediato, algunos familiares dejaron de hablarle.

“Nuestro movimiento [para poner fin a la ablación o mutilación genital femenina] se ha enfrentado a una reacción violenta tanto pública como privada de la comunidad: nos controlan mucho en línea, hay intentos de desacreditar constantemente las historias de las sobrevivientes y silenciar a quienes hablan”, acotó Johari.

Pero el troleo en las redes no ha detenido la campaña.

“Es importante enfatizar que esto es una señal de la importancia de nuestro trabajo, y obtenemos tanto o más apoyo positivo de los miembros de la comunidad como reacciones negativas”, agrega Johari.

El clima contra el Islam y sus seguidores en buena parte del mundo, India y Estados Unidos incluidos, hace que muchas víctimas de ablación

opten por permanecer calladas.

Taher reconoce que hay una interacción de opresiones y la islamofobia es una de ellas cuando se lucha contra la mutilación genital femenina.

Particularmente con la falsa suposición de que sólo los musulmanes practican la mutilación genital femenina.

Pero la realidad, dice Taher, es que “la ablación o mutilación genital femenina ocurre en todos los Continentes del mundo excepto en la Antártida, y cuando ocurre dentro de comunidades islámicas, se trata de una minoría muy pequeña”.

“La verdad es que la ablación o mutilación genital femenina es una norma social justificada en todo tipo de formas: religión, salud, estatus social, matrimonio, tradición, cultura, etcétera”, dice.

Se trata, puntualiza Taher, de “una norma social que se inició antes del advenimiento del islamismo y el cristianismo”.

Por eso, insistió, “es vital hablar en contra de la islamofobia y la xenofobia cuando se trabaja contra la mutilación genital femenina”.

En tanto, en India, Ranalvi subrayó que sólo se emprendieron acciones legales cuando todo lo demás había fracasado.

“Llamamos a las puertas de los tribunales cuando fracasaron todos los intentos de diálogo con el clero y el liderazgo dentro de la comunidad. Es imperativo el apoyo de las leyes y de los órganos institucionales para dar poder a nuestra resistencia y permitirnos tomar el control de nuestros cuerpos y ayudar a poner fin a esta violación de ellos”, agrega Ranalvi.

Este 6 de febrero se conmemora el Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina. Al respecto, Ranalvi dice que “sólo se puede esperar que se acabe con esta práctica, que sigue siendo un secreto oscuro pero ampliamente prevalente que viola los derechos humanos de las mujeres y practicado por diferentes comunidades en todo el mundo”. ◀



123RF

UNA NUEVA AGENDA NACIONAL DE RIESGOS PARA UNA NUEVA LEY DE SEGURIDAD NACIONAL

Es imprescindible una revisión y actualización de la Ley de Seguridad Nacional con base en una reelaboración de la Agenda Nacional de Riesgos, así como de la definición precisa de la seguridad interior y la seguridad pública, considera el experto Emilio Vizarratea en su libro *Repensar México. Una introducción a la seguridad y defensa nacionales*. Editada a finales de 2020 y de próxima aparición en librerías, la obra fue prologada por el actual secretario de Marina, José Rafael Ojeda. Con la autorización del autor, *Contralínea* publica un extracto del capítulo 6: “La importancia de la información y la inteligencia en los modelos geopolíticos contemporáneos”

EMILIO VIZARRETEA ROSALES, ESPECIALISTA EN INTELIGENCIA Y SEGURIDAD NACIONAL; DOCTOR EN TEORÍA CRÍTICA POR EL INSTITUTO DE ESTUDIOS CRÍTICOS; POSGRADUADO EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y CIENCIAS POLÍTICAS, FILOSOFÍA, DERECHO, RELACIONES INTERNACIONALES Y ESTUDIOS ESTRATÉGICOS Y DE SEGURIDAD NACIONAL; PROFESOR-INVESTIGADOR EN LA UNAM; Y MAESTRO EN SEGURIDAD NACIONAL POR EL CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES NAVALES DE LA SECRETARÍA DE MARINA.



Los retos y dificultades que afrontan quienes participan de la responsabilidad en las instancias de seguridad nacional en México se deben considerar al momento de articular políticas públicas y estrategias, en y con la apreciación de los diversos temas de la seguridad nacional y, de manera concreta, en el uso de la inteligencia para emprender los operativos de seguridad necesarios en una ruta crítica.

Esto requiere de la revisión y actualización de la Ley de Seguridad Nacional: eje de articulación de la propuesta de una política de seguridad nacional democrática, a partir de la elaboración de la *Agenda Nacional de Riesgos* y de la definición precisa y clara de conceptos como los de la seguridad interior y la seguridad pública.

Esto, porque la función de inteligencia es el punto de inflexión y de innovación para un gobierno eficaz, y está asociada de manera directa a lo estratégico. Así como el proyecto nacional, conforme a la Constitución, plantea las potenciales reformas constitucionales y legales en distintas materias, sobre todo en las funciones de seguridad pública, procuración de justicia y seguridad interior.

También se necesita profundizar en inteligencia a través de la *Agenda Nacional de Riesgos* —mediante un enfoque prospectivo y preventivo— en un marco de gobernabilidad democrática. Con ello, el gobierno atiende, en íntima conexión con la sociedad, el tema de la seguridad, con las políticas públicas de desarrollo social y de justicia, en una sola idea y con visión de Estado.

Política de Estado para enfrentar crimen organizado

Actualmente, en el país se enfrenta a los líderes de las organizaciones del narcotráfico que escalan hasta el tercer nivel en la delincuencia, lo que ha generado una diáspora delictiva, una mayor actividad en

acciones no necesariamente vinculadas de manera directa al narcotráfico.

Es por ello que en la elaboración y ejecución de políticas públicas —en este caso de seguridad—, lo relevante está en cómo generar una política de Estado, de carácter transversal en lo institucional, temático y operativo, que sirva al jefe del Ejecutivo federal para la gobernabilidad democrática y para apuntalar las líneas del desarrollo y la seguridad nacional.

Así, las características y el contenido de la *Agenda Nacional de Riesgos* demandan una perspectiva distinta, de perfil transversal, que interactúe entre los tópicos que atiende y las instituciones encargadas de asumir esas tareas. Rasgos estructurales distintivos, multidimensionalidad y multilateralidad, resonancia para la seguridad en un contexto de gobernabilidad democrática y de globalización.

Las policías preventivas pierden fuerza, mientras que hay mayor presencia de las Fuerzas Armadas. Resurgen policías comunitarias, legales o no, legítimas o no. Eso genera un círculo vicioso en el que las dificultades continúan, lo que pone en duda el buen resultado de la estrategia de seguridad. Y ésta, a pesar del control de la información, sigue observándose con posibilidades disfuncionales.

Profundizar en reducir-erradicar la corrupción y la impunidad, con un mayor uso de las funciones de inteligencia para encarar a la delincuencia organizada, es un aspecto que no debe ser minimizado: está en el centro de la atención y el combate a la delincuencia y a los diversos tráfico.

La combinación coadyuvará al redireccionamiento estratégico: reducir los índices de violencia que laceran a la sociedad. Determinante en el alcance político y social.

Con esta idea central, hay que trabajar en la integración teórico-práctica mediante una reingeniería de la acción gubernamental, que no implique necesariamente el

cambio inmediato del gabinete, pero que sí logre reestructurar el gobierno, visualizando los aspectos internos y externos, operativos, regionales y estatales. Se trata de atender lo estratégico, del desarrollo y la seguridad.

La agenda de gobierno nutrida por la *Agenda Nacional de Riesgos* debe apuntalar el grado de efectividad mediante un mapeo, tablero de mando o de control de las acciones gubernamentales. Asimilar las virtudes del cuarto de mando y del tablero de control.

Considerar la relevancia estratégica del Consejo de Seguridad Nacional (CSN)

para la definición e instrumentación de la agenda de la institución presidencial, el monitoreo de las políticas públicas en esa materia, y la evaluación constante de sus resultados.

Usar diversos elementos para la gobernabilidad democrática, asociados a tareas de seguridad nacional: un gobierno que use la inteligencia, que se apoye en lo transversal, que tenga una dimensión integral, que elabore decisiones preventivas fundadas en una prospectiva, que sea eficiente en sus respuestas, para enfrentar demanda social, amenaza, riesgo o antagonismo a la seguridad nacional.

Los mecanismos que hay que fortalecer para su mejor funcionamiento en las instancias de coordinación, de ejecución, de planeación, de discusión y elaboración, de diseño, de todos los criterios y consideraciones que tienen que ver con los problemas de seguridad, justicia y delincuencia organizada; del mecanismo FODA.

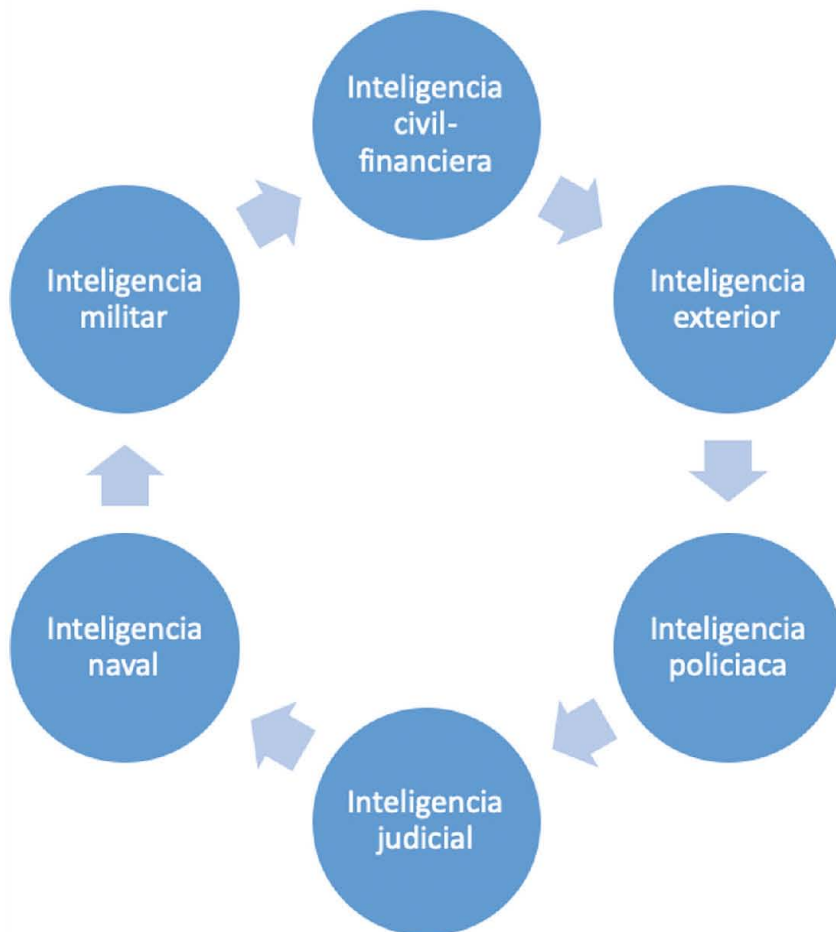
Así, el CSN debe cumplir con la responsabilidad de ser una instancia del presidente, que monitorea y articula los eventos de relevancia estratégica para la sociedad, concatenados con lo global y mundial. No puede ser una instancia burocrática, sin alcance estratégico para la toma de decisiones.

Para ello, el Consejo de Seguridad Nacional requiere mayor capacidad, eficacia, eficiencia y efectividad, para responder a los eventos, sobre todo los urgentes. Esta estructura institucional debe articular a todas las instancias existentes y proponer acciones de seguridad nacional.

Requiere una estructura articuladora de la información de todas las dependencias públicas y de las oficinas en el exterior, que realice valoración programática, sistemática e integral, en tiempo y forma, de las decisiones y de los cursos de acción.

Así, en el ámbito de la coordinación de la inteligencia nacional, siguiendo el pro-

Esquema 6.6



Fuente: Elaboración propia



ceso de fusión de manera estratégica, se puede dar el paso a una nueva Agencia de Coordinación de Inteligencia, en donde se integren los datos fundamentales que nutren a la *Agenda Nacional de Riesgos*.

Coadyuvando a un *análisis integrado* y una *mejor coordinación* de las actuales instancias de inteligencia civil (CNI), inteligencia policiaca (SSP), inteligencia militar (Sedena), inteligencia naval (Semar), inteligencia económica-financiera (UIF), inteligencia judicial-ministerial (PGR), inteligencia exterior (SRE) Gobernación (Aduanas, Migración) necesarias para atender los problemas de interés para la seguridad y el desarrollo nacional.

Esta propuesta que responde al qué hacer en las dificultades actuales de la inteligencia y la seguridad nacional es un mecanismo sencillo y eficaz, de amplia repercusión, que sólo requiere la decisión y

voluntad presidencial para su implementación y desarrollo.

Es un instrumento que puede devenir en articulador de los talentos militares y civiles, de los esfuerzos institucionales y facilitar las tareas presidenciales de gobierno, de análisis estratégico y de operación política y social.

En suma, el Consejo de Seguridad Nacional, como órgano articulador de las propuestas presidenciales, de la coordinación analítica y estratégica de los tópicos del desarrollo y la seguridad nacionales.

A partir del trabajo de inteligencia y la realización de operativos específicos, vía la nueva agencia-Mecanismo de Coordinación de Inteligencia, podría lograrse lo que se ha planteado desde que existía el Grupo Coordinador; previo a la toma de posesión de sus respectivas parcelas de gobierno.



Así podría articularse la fusión de inteligencia y de creación de una nueva agencia que articule la información gubernamental, que le dé sentido y dirección a la actividad de inteligencia y que coadyuve en las decisiones que tienen que ver con las operaciones. No sólo el diseño de cursos de acción posible, de establecimiento y orientación de objetivos relevantes, sino de retroalimentación en la operación cotidiana.

Nuevo paradigma de seguridad gubernamental

La perspectiva de la seguridad nacional, desde la óptica del gobierno de México, debe enfocarse en clave de seguridad pública, proceso en el cual se encuentran inmersas las instancias de seguridad nacional y las Fuerzas Armadas, una tarea en cons-

trucción, que conduce a la constitución de la Guardia Nacional.

Si bien las Fuerzas Armadas mantendrán el objetivo de salvaguardar la integridad territorial y preservar la soberanía nacional, con la atención a la seguridad y defensa nacionales, habrá de incluir a la seguridad interior y pública, considerando el respeto a la ley y los derechos humanos.

En suma, el nuevo gobierno busca la paz y no la guerra. Las Fuerzas Armadas se convertirán en instituciones de protección a los mexicanos, en todo tiempo y lugar.

En el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, los objetivos estratégicos de seguridad nacional —tutelados por las Fuerzas Armadas, en coadyuvancia con secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana y Gobernación— habrán de atender ocho aspectos fundamentales, en forma coordinada con otros poderes públicos y niveles de gobierno:

- 1 Erradicar la corrupción y reactivar la procuración de justicia
- 2 Garantizar el empleo, educación, salud y bienestar
- 3 Pleno respeto y promoción de los derechos humanos
- 4 Regeneración ética de la sociedad
- 5 Reformular el combate a las drogas
- 6 Emprender la construcción de la paz
- 7 Recuperación y dignificación de los centros penitenciarios
- 8 Seguridad pública, seguridad nacional y paz

El aspecto preventivo configura un eje de atención sistemática en cada uno de los elementos anteriores, con el fin de observar riesgos y amenazas en materia de seguridad nacional. El trabajo de análisis de la información atenderá las acciones estratégicas, tácticas y operativas bajo la responsabilidad de las Fuerzas Armadas.

En cuanto al respeto a los derechos humanos, se debe evitar el uso de la fuerza de manera innecesaria. La protección de la vida y bienes de las personas, junto con las instalaciones estratégicas y las instituciones de la República y la democracia constituyen un activo para lograr los fines establecidos.

Es así como el gobierno de México entiende a la seguridad nacional, como una condición indispensable para garantizar la integridad y la soberanía nacionales, libres de amenazas al Estado, busca construir una paz duradera y fructífera.

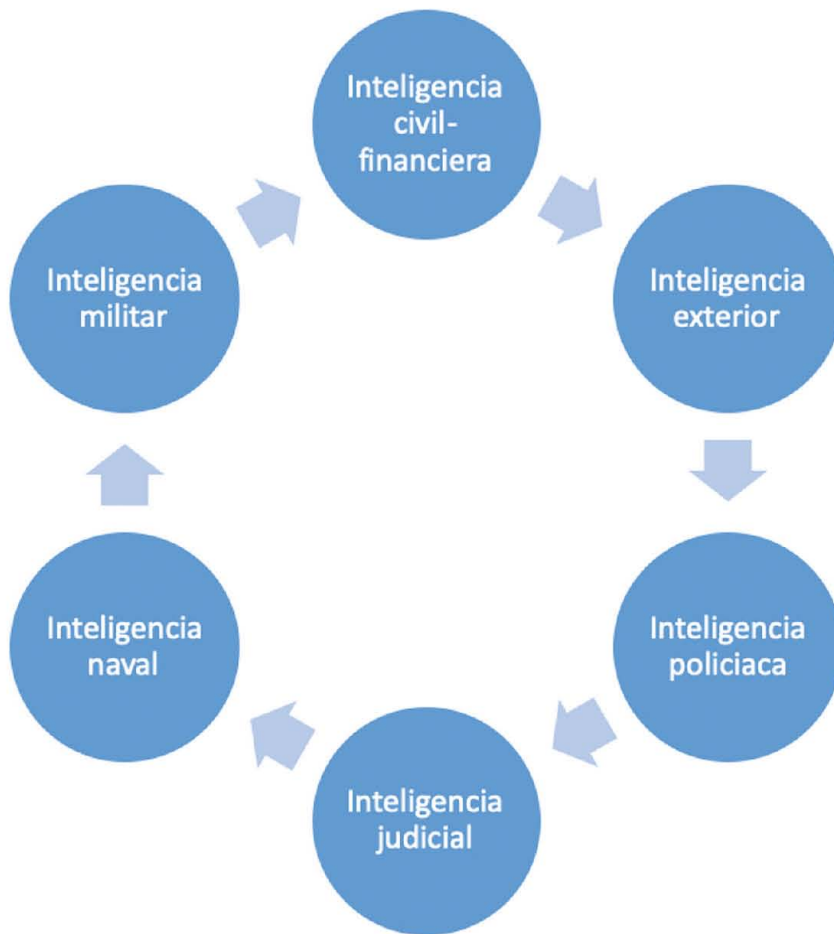
Por ello, el concepto de seguridad nacional debe ser entendido desde una perspectiva estratégica, porque intentará anticiparse a los riesgos y amenazas; amplia, porque buscará amparar a la totalidad del conjunto social; transversal, porque involucrará a las instituciones y sectores nacionales; e integral, porque estará supeditada a una sola doctrina y estrategia.

Es decir, se debe garantizar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado democrático, así como un desempeño de gobierno

ético y transparente, así como fortalecer un modelo de seguridad con profundo sentido humano.

En esta ruta, el gobierno de México define como su visión de la seguridad nacional que al término de la administración se encuentren ya instaladas todas las capacidades institucionales, los instrumentos operativos, los sistemas de coordinación y los fundamentos de una doctrina y una estrategia únicas, destinadas a establecer y preservar las condiciones que garanticen la integridad territorial y la soberanía nacional. ◀

Esquema 6.6



Fuente: Elaboración propia

LA LARGA SOMBRA DE LA EPIDEMIA DE CÁNCER Y COVID-19 EN IRAK

Un sistema de salud devastado, una población enferma de cáncer masivamente por causa de la guerra, una corrupción generalizada entre la clase política. Así vino a encontrar Irak la Covid-19... Y todavía hay quienes quieren culpar a la población del aumento de los contagios. Estados Unidos, principal responsable de la tragedia que viven hoy los iraquíes

MAC SKELTON, DIRECTOR DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS REGIONALES E INTERNACIONALES DE LA UNIVERSIDAD AMERICANA DE IRAK, EN SULAIMANI, Y PROFESOR VISITANTE DEL CENTRO DE ORIENTE PRÓXIMO DE LA LONDON SCHOOL OF ECONOMICS/MIDDLE EAST RESEARCH AND INFORMATION PROJECT-REBELIÓN*

DAVID MANRIQUE

Irak, descrito por *The Economist* este otoño como “el Estado árabe más infectado”, presenta el mayor número de casos de Covid-19 y la mayor suma de muertes por coronavirus del mundo árabe. Además de la respuesta fragmentada e ineficaz del gobierno, los medios de comunicación apuntan a un obstáculo adicional: el comportamiento de los pacientes de Covid-19 y sus familias.

Varios artículos de importantes periódicos internacionales han resaltado que los iraquíes se resisten a llevar a cabo los procedimientos de cuarentena, que se niegan a utilizar equipos de protección en los hospitales, que son reticentes a acudir al hospital antes de que sea demasiado tarde y que son propensos a la violencia contra los profesionales médicos que no consiguen curar a sus seres queridos. Esas mismas informaciones sugieren varias explicaciones. Un artículo de *The New York Times* afirmaba de forma poco convincente que el problema radica en las normas tribales y religiosas, y señalaba que el “aura de pecado que rodea al virus” en Irak había reducido el cumplimiento de la cuarentena [1].

Pero este análisis sobre el (mal) comportamiento civil ignora el vasto conocimiento que ha acumulado la población sobre las epidemias. Los y las iraquíes han adquirido una gran experiencia en la lucha contra enfermedades que parecen no perdonar a nadie. De hecho, en Irak se dice que cada familia tiene a alguien con cáncer, una enfermedad que por primera vez se convirtió en epidemia en la conciencia pública poco después de la Guerra del Golfo de 1991, cuando generó inmensa inquietud tras conocerse el impacto potencialmente cancerígeno de las armas [revestidas] de uranio empobrecido.

Tres décadas de experiencia con el cáncer en el país permiten entender por qué muchos iraquíes acogen con escepticismo

las instrucciones del Ministerio de Salud y de los hospitales relativas al corona virus. Una razón primordial tiene que ver con el fracaso del Estado y de la clase política en la gestión de la epidemia de cáncer —lo mismo en el frente preventivo que en el curativo— al haber desatendido las causas medioambientales del cáncer relacionadas con la guerra y el deterioro de la atención oncológica.

Por un lado, estos fracasos han generado un cúmulo de desconfianza generalizada en las instituciones médicas y, por otro, han producido nuevas prácticas y formas de conocimiento en los entornos familiar y comunitario. Desde los años posteriores a la invasión liderada por Estados Unidos en 2003, los y las iraquíes han desarrollado sus propias formas de entender las relaciones causales que contribuyen a la aparición o al desarrollo del cáncer. Yendo más allá del uranio empobrecido que marcó la era de 1990, han ampliado su comprensión de la toxicidad e incluyen en ella una amplia gama de contaminantes materiales y déficits morales en los entornos físico y social. Además, han desarrollado mecanismos novedosos para obtener y administrar tratamientos oncológicos a través de redes y recorridos interprovinciales y transfronterizos en la búsqueda de atención médica.

Esta tendencia de las familias a depender de sus propios conocimientos y prácticas sobre la enfermedad se está aplicando en la actualidad a una pandemia con características y presiones claramente diferentes. Por ejemplo, cuando en junio de este año circularon por todo Irak informes sobre la escasez de oxígeno, los familiares que cuidaban a pacientes de Covid-19 en algunos hospitales respondieron identificando canales de distribución que les permitieran almacenar botellas de oxígeno junto a las camas de sus familiares enfermos [2]. Los médicos muestran desánimo



Entre 2003 y 2007, la compleja red de hospitales públicos se desarticuló. Decenas de médicos, oncólogos entre ellos, huyeron del país



las sanciones. Ante estas privaciones, las familias comenzaron a desarrollar conocimientos y redes necesarias para obtener medicamentos y acceder a tratamientos, lo que incluía abrirse camino en los canales de distribución del mercado negro y transfronterizos [7]. Se inició así el proceso gradual de desplazar la carga de la atención de las instituciones médicas a las familias y a la comunidad.

Interpretación del cáncer después de 2003

En los años que siguieron a la invasión estadounidense de Irak en 2003, la historia del uranio empobrecido y el cáncer no desapareció de la atención científica y periodística. Sin embargo, para la élite política y para el gobierno, el interés en la epidemia se desvaneció. El Estado iraquí —y sus obligaciones para con la sociedad en general— degeneró en partidos políticos rivales, desmandados y competitivos, cada uno de los cuales tenía intereses económicos concretos, esferas territoriales de influencia y redes de patronazgo [8]. La epidemia que durante años se presentó como una amenaza para el conjunto de la población iraquí dejó de ajustarse a las interesadas agendas políticas de la era posterior a 2003. Además, habida cuenta del escaso compromiso mostrado por la coalición encabezada por Estados Unidos para proteger o reconstruir la infraestructura sanitaria del Estado, el Ministerio de Salud y sus activos se convirtieron en espacios a saquear por los nuevos (y armados) partidos políticos, en particular la facción sadrista y su ala militar, el Ejército de Mehdi. Entre 2003 y 2007, la compleja red de hospitales públicos se desarticuló aceleradamente. Decenas de médicos —también oncólogos— huyeron del país a consecuencia de la intimidación y la violencia que padecían en sus lugares de trabajo por parte de milicias

rivales, por la falta de equipamientos y por la corrupción rampante.

Aunque el cáncer desapareció del mapa político durante la etapa posterior a 2003, en la sociedad, tanto las prácticas como los discursos en torno a la enfermedad sufrieron una rápida e importante transformación. La narrativa sobre el cáncer difundida desde el Ministerio de Salud anterior a la invasión —que vinculaba la aparición de la epidemia a una toxina específica diseminada por un determinado ejército extranjero— dejó de tener influencia sobre una población que cada vez tenía más claro que las fuentes de toxicidad estaban estratificadas y fragmentadas a lo largo de diferentes iteraciones de guerras y actores políticos y militares diversos.

En mi labor sobre el terreno y en entrevistas realizadas durante 7 años (2012-2018) entre más de 100 pacientes iraquíes de cáncer y sus familias (en Irbil, Kirkuk, Sulaymaniya, Bagdad y Basora), el uranio empobrecido rara vez ocupó una posición relevante en los debates sobre la causalidad del cáncer [9]. Incluso entre pacientes de las zonas del sur, intensamente bombardeadas durante la Guerra del Golfo de 1991, las personas encuestadas no sólo se referían a esos bombardeos sino también, entre otras causas, a las municiones de la guerra entre Irán e Irak de 1980-1988, a las deficiencias nutricionales de la época de las sanciones en la década de 1990, a los fragmentos tóxicos de las explosiones terroristas posteriores a 2003, a los contaminantes de los yacimientos petrolíferos y a las fábricas mal gestionadas por la actual élite gobernante. El sur de Irak se había convertido en un complejo terreno de toxicidad estratificada a lo largo de la historia reciente.

Esta conciencia social sobre sucesivos legados de toxicidad sigue de cerca los recientes hallazgos científicos de investigadores iraquíes e internacionales que



DAVID MARIQUE

han detallado el impacto en la salud de un conjunto más extenso de toxinas diferentes del uranio empobrecido [10]. Desde 2010, la producción científica sobre el cáncer y la exposición medioambiental en Irak ha ido ganando fuerza gradualmente tras años de inactividad. Varios estudios recientes han explorado las tasas de cáncer y la exposición ambiental no sólo en el sur de Irak sino también en zonas particularmente afectadas por la invasión liderada por Estados Unidos en 2003 [11]. Un estudio señala “el aumento del cáncer y de la mortalidad infantil, que son alarmantemente altos” en Faluya, y cita el uranio empobrecido como “una exposición potencial relevante” [12].

Pero en general los y las iraquíes de a pie tienen poca fe en el estado actual de la ciencia en su país y, en particular, en su ca-

pacidad para informar y diseñar políticas. En los pasillos y salas de espera de los hospitales, las discusiones sobre los agentes causales se entremezclaban a menudo con expresiones de incertidumbre y desesperación ante la total incapacidad del Estado para comprender y gestionar la epidemia. Constatar la decadencia científica —y por consiguiente, la imposibilidad de obtener certezas— provocaba dolorosos debates, lo que sugiere un fuerte apego latente en la sociedad a una trayectoria histórica de rigor médico y empírico. Un paciente de Basora, propietario de una pequeña tienda de ropa, señaló: “Podrían ser los bombardeos, o el pan, o incluso el humo de los campos de petróleo. Hay que estudiarlo, pero... Irak está acabado”. Hasta para un tendero sin formación universitaria, la muerte de la ciencia y el fin de Irak iban

“El número de casos de cáncer aumentó claramente debido al uso, por parte de Estados Unidos, de municiones revestidas de uranio



ante este tipo de acciones porque generan caos cuando lo que se necesita son respuestas coordinadas, pero se trata de una práctica heredada indudablemente de los años de experiencia adquirida haciendo frente a las deficiencias provocadas por la guerra en la medicina y en los equipamientos necesarios para tratar la leucemia, el cáncer de mama y otras enfermedades.

Los fallos del sistema sanitario iraquí para hacer frente adecuadamente a la pandemia de coronavirus no se pueden achacar a lo que hacen las familias por el bienestar de sus familiares enfermos. Al contrario, la causa de la respuesta ineficaz es la conducta incontrolada y egoísta de los partidos políticos que llegaron al poder después de la invasión estadounidense. Una elite contra cuya corrupción iban dirigidas las protestas de amplios sectores de iraquíes en 2019-2020, justo antes del advenimiento de la pandemia. En aquellas manifestaciones también participaban iraquíes enfermos de cáncer mostrando a todos sus máscaras respiratorias, sus cabezas calvas y sus sillas de ruedas. Un paciente de cáncer portaba un cartel que decía: “La corrupción me ha robado el tratamiento”. No es de extrañar que si los pacientes responsabilizan a la clase política gobernante de la falta de tratamiento adecuado frente a una epidemia desconfíen de esa misma clase política para gestionar el impacto devastador de una pandemia global.

Surgimiento de la epidemia de cáncer

El cáncer se ha vinculado explícitamente con el deterioro general de la salud de la población iraquí durante casi 3 décadas. En la década de 1990 y principios de 2000, el aumento de casos de cáncer en Irak provocó un acalorado debate sobre las causas de la epidemia. Responsables del Ministerio de Salud iraquí argumenta-



ron ante la opinión pública iraquí y la comunidad internacional que el número de casos de cáncer aumentaba debido a un agente causal clara y netamente definido: el uso por parte de Estados Unidos de municiones [revestidas] de uranio empobrecido durante la Guerra del Golfo de 1991.

El Subsecretario de Salud iraquí Shawqi Sabri Murcos afirmó en una conferencia en 1998, basándose en estudios publicados por científicos iraquíes, que: “El uso de uranio empobrecido ha causado daños irreparables al pueblo iraquí y a su medio ambiente. [...] Nuestras investigaciones muestran un aumento desmesurado de los casos de leucemia, especialmente entre los niños y niñas de las zonas del sur de Irak bombardeadas por los aliados” [3]. Los responsables iraquíes también señalaron que las sanciones de Naciones



DAVID MARIQUE

Unidas contra el país habían provocado el deterioro de la práctica médica oncológica porque los hospitales no podían reponer los fármacos de quimioterapia ni obtener suministros médicos básicos.

La capacidad de proporcionar alimentación y salud a la población —y también gestión y control de las enfermedades— ha estado en el centro de la lógica del poder estatal desde que se fundó el moderno Estado iraquí en la década de 1920 [4]. Cuando el Ministerio de Salud del régimen de Sadam Husein empezó a perder capacidad de proporcionar servicios públicos de alta calidad en la década de 1990 como consecuencia de las sanciones, el Estado quedó políticamente inerte. Al tener el cáncer una fuerte carga simbólica en todo el ámbito internacional, el mensaje del gobierno a la población iraquí (y al

mundo) fue señalar al responsable: fueron la guerra liderada por Estados Unidos y las sanciones internacionales las que causaron simultáneamente el cáncer y la destrucción del sistema público de salud.

El ejército estadounidense respondió a estas acusaciones haciendo una lectura mezquina de los datos científicos sobre uranio empobrecido. El portavoz del Pentágono, Kenneth Bacon, afirmó en el punto álgido de la controversia en 1998: “No creemos que una exposición normal a estas municiones cause cáncer, y no hemos hallado nada que confirme las afirmaciones iraquíes” [5]. Todo depende de cómo se defina “exposición normal”. Antes de la invasión de 2003, los responsables militares estadounidenses rechazaron reiteradamente cualquier inquietud derivada del uso de armamento de uranio empobrecido basándose en un estudio realizado por la academia científica británica The Royal Society. Sin embargo, ese estudio calculó el “exceso de riesgo” de hipotéticos escenarios de exposición a uranio empobrecido basándose meramente en una exposición estimada de los soldados en tiempo de guerra, y no en una exposición a largo plazo de los civiles que viven en el medio donde se abandonan municiones tóxicas. Si bien los autores del estudio llegaron a la conclusión de que el riesgo de cáncer sería mínimo para los soldados en el campo de batalla, reconocieron que las consecuencias de la exposición a largo plazo para los civiles seguían siendo muy inciertas [6].

Mientras tanto, los pacientes de cáncer en Irak quedaron abandonados a su suerte con la carga progresiva de su enfermedad y las graves deficiencias en la atención sanitaria. En 2000 la BBC informó de que los médicos iraquíes llamaban a la sección de leucemia del Hospital Central Infantil de Sadam el “pabellón de la muerte” por su tasa de mortalidad del “ciento por ciento” debido a las carencias causadas por

“

Los pacientes de cáncer, abandonados a su suerte, con la carga progresiva de su enfermedad y las deficiencias de la atención sanitaria

”



de la mano.

Hasta que los equipos científicos locales e internacionales no dispongan de los recursos necesarios para desarrollar investigaciones más exhaustivas, a la población iraquí no le queda otra opción que estudiar el medio ambiente en busca de posibles peligros y carcinógenos sirviéndose de sus propias facultades de percepción. Es revelador que la comprensión local de la toxicidad esté segmentada regionalmente y sea flexible en función de la progresión actual de la guerra y el conflicto. Por ejemplo, con el surgimiento del Estado Islámico de Irak y Siria (Daesh) en 2014, los pacientes de las zonas afectadas por el conflicto incorporaron estas realidades a su comprensión de la enfermedad. En entrevistas realizadas durante 2016 en el Hospital de Cáncer de Kirkuk (un centro oncológico

que acoge a muchas personas desplazadas de las zonas ocupadas por Daesh), un ama de casa de 39 años y paciente de cáncer de mama decía: “El entorno inmundado de mi zona, Hawiya, está contaminado por el humo de los bombardeos de Daesh, lo que podría ser una causa del cáncer. Debido a los apagones nocturnos, tenemos que dormir en la azotea de nuestra casa. Cuando nos despertamos por la mañana, obviamente notamos que el color del kulla, la mosquitera de tela que ponemos a nuestro alrededor para protegernos de las picaduras de los insectos, ha cambiado de blanco a negro oscuro”.

Asimismo se refirió al posible impacto que le produjo el horror experimentado durante su fuga de Hawiya, al dolor acumulado durante años de guerra, y a la pérdida de su hermano en 2003. Está es-

tudiado que las emociones fuertes erosionan las defensas del cuerpo, lo que apunta aún más a las múltiples consecuencias de la guerra que se superponen y que afectan al cuerpo. Ahora que reside en la ciudad de Kirkuk, sigue siendo vulnerable a los quebrantos del conflicto: señalaba que tanto los médicos como los ciudadanos de a pie la trataban “inhumanamente” porque asociaban su región natal con Daesh, y que ese ambiente de sospecha ha afectado a su capacidad para hacer frente al cáncer y curarse. Pero insistía en que su situación no era excepcional: “Todos los iraquíes estamos viviendo bajo esta presión. Un hospital sucio. Un médico que no te trata como si fueras humana. Políticos que venden medicinas para lucrarse. En Irak la situación es extenuante”, se lamentaba. Para esta paciente de cáncer de mama al igual que para muchas otras personas iraquíes, la sensación de toxicidad va mucho más allá de los contaminantes físicos. El ambiente material y moral de Irak ha quedado contaminado por décadas de guerra y por el abandono de la clase política.

Los nuevos e improvisados caminos del cuidado de la salud

Para la mayoría de los pacientes de cáncer iraquíes la búsqueda de atención médica adecuada resulta una experiencia calamitosa y rocambolesca. Obtener atención médica para el cáncer en Irak después de 2003 requiere tener que viajar por el país y por toda la región. Antes de 2003 el mecanismo de derivación médica era relativamente sencillo y se gestionaba con sistematicidad. La quimioterapia y la radioterapia requerían derivaciones a Bagdad, Mosul o Basora. Tras la invasión estadounidense, a medida que esas ciudades fueron pasto de la violencia y los

hospitales de los saqueos, las familias con pacientes de cáncer empezaron a considerar otras opciones. Las ciudades de la región kurda, semiautónoma y relativamente estable, desarrollaron centros públicos de oncología que rivalizaban con los de Bagdad, lo que obligó a muchos pacientes a dirigirse hacia el norte, hasta Irbil y Sulaymaniya, y a otros centros transfronterizos como Beirut y Estambul.

Es importante señalar que en lugar de seguir vías de derivación hospitalaria gestionadas y dirigidas por médicos, se seguían vías *ad hoc*, improvisadas e impulsadas por los propios cálculos y suposiciones de los pacientes.

Debido a la necesidad de movilidad, los y las iraquíes no pueden depender exclusivamente de los contactos dentro de su limitado grupo tribal, familiar o profesional. Las salas de espera de los hospitales y los hoteles situados junto a los centros de oncología se convierten en lugares donde pacientes y cuidadores de todo Irak intercambian números y contactos por si se necesitan en cualquier momento. En el hospital oncológico de Sulaymaniya, por ejemplo, fui testigo de cómo los pacientes recurren a recursos concretos de cada región: un paciente áraboparlante de Bagdad puede necesitar la ayuda de un kurdo de Sulaymaniya para solicitar la residencia, y el kurdo a su vez, puede necesitar que se le traiga cierta medicación de Bagdad.

Esas relaciones interregionales e interconfesionales no se organizan solo para los intercambios materiales. Como se indicaba en la entrevista con la paciente de cáncer de mama de Hawiya, los y las pacientes de cáncer iraquíes refieren que el deterioro de las instituciones médicas ha despojado a los hospitales no sólo de su suficiencia técnica sino también de sus recursos morales; los médicos están exhaustos e irritables bajo la presión que

“

Para la mayoría de los pacientes de cáncer iraquíes, la búsqueda de atención médica adecuada resulta una experiencia calamitosa y rocambolesca

”

“

Los médicos
están exhaustos
e irritables
ante la presión
que imponen
ya 3 décadas
de abandono
y corrupción
del sistema
hospitalario

”

imponen décadas de instalaciones abandonadas y de corrupción. Como la mayoría de los médicos ya no puede atender el “estado del alma” —que muchos iraquíes insisten constituye “la mitad del tratamiento”— las familias tienen que buscar que les proporcionen esta dimensión crucial de la atención en otros lugares. Los cuidadores familiares suelen comentar que disfrutar de una risa con extraños en la sala de oncología hace que los pacientes se olviden momentáneamente de su enfermedad y del resto de problemas que causa la guerra, y conserven las fuerzas necesarias para la curación.

El movimiento constante entre provincias y a través de las fronteras es agotador y caro [13]. Los pacientes que acudían a consultas en múltiples hospitales y provincias lo hacían buscando una segunda opinión en momentos especialmente críticos durante el tratamiento. Una paciente con cáncer de mama lo explicaba así: “Me trataba un médico en Bagdad pero me aconsejó una mastectomía, y pensé, ‘esto es Irak, los médicos no cuentan con buenos equipamientos, necesito otra opinión’. Y entonces vine a Irbil y me dijeron que no necesitaba una mastectomía. Estaba bien confundida. Consulté con algunos amigos, di con otro médico en Bagdad y al final hice una consulta en Beirut, y seguí el consejo del médico de Beirut de volver a Bagdad para recibir tratamiento”. Lo que los pacientes tratan al recurrir a un conjunto interregional de herramientas de diagnóstico y valoraciones es recibir confianza sobre cómo proceder.

Estas vías de atención han tenido que lidiar progresivamente con la politización del acceso. Los oncólogos iraquíes suelen afirmar que reciben y tratan a todos los pacientes de manera imparcial. Pero desde la perspectiva del paciente, no hace falta que el hospital rechace atenderte para que resulte inaccesible. Tras la derrota de

Daesh en 2017, sobretudo, una serie de grupos armados que se extienden por las provincias centrales y septentrionales del país han establecido puestos de control que hacen que a quienes carecen de afiliación o conexiones políticas adecuadas les sea imposible la movilidad entre los centros de tratamiento provinciales. Además, a nivel de los propios hospitales, la politización de los triajes se manifiesta de manera sutil. La mayoría de los cánceres requieren tratamientos durante un largo período de tiempo, lo que significa que es vital garantizar el acceso constante a todos los productos farmacéuticos y pruebas necesarias. Durante el período de control de Daesh sobre Mosul, los hospitales oncológicos de las ciudades cercanas de Irbil y Sulaymaniya vieron un aumento de



pacientes de Mosul y otras ciudades afectadas. A esos pacientes desplazados casi nunca se les negó la atención de manera inmediata pero muchos se vieron obligados a comprar importantes dosis de medicamentos de quimioterapia mientras que a los residentes locales se les administraba todo el tratamiento desde el subministro público. Por eso los pacientes más empobrecidos y más políticamente vulnerables de Irak acaban en los costosos centros de tratamiento de Beirut y Estambul: aunque los costos son abrumadores, al menos se les proporciona de manera predecible.

Cáncer y Covid-19

Los relatos periodísticos sobre la actual crisis de Covid-19 en Irak pretenden



DAVID MANRIQUE

que los ciudadanos comunes se resisten a la cuarentena y a realizarse las pruebas debido a prácticas tribales y a nociones de estigmatización culturalmente conformadas. Pero el fenómeno más determinante y extendido es que los y las iraquíes se han acostumbrado a improvisar las maneras de procurarse atención médica, lo que a menudo implica eludir el consejo de los médicos de un sistema de salud en el que no confían; depender de familia, amigos e incluso de extraños por todas las provincias facilita la infraestructura material y apoyo moral. No es que los y las iraquíes sean escépticos respecto a la medicina en términos absolutos. Su escepticismo es puntual y se ha desarrollado como reacción a las deficiencias que ha provocado la guerra y la politización de la atención a la salud. Ni desprecian el rigor científico para determinar las causas definitivas y el alcance de las enfermedades. Pero a falta de un Estado comprometido con la salud de la población y con la correspondiente producción científica, están abocados a la incertidumbre ante los numerosos materiales potencialmente contaminantes y los defectos morales del entorno social, considerados ambos como causantes o agravantes de sus enfermedades.

En el contexto de Covid-19, el Ministerio de Salud ha ignorado estas realidades vividas y ha procedido como si estuviera operando en un país en el que la confianza de la sociedad en la capacidad del Estado para comprender y gestionar las epidemias estuviera intacta.

El enfoque del Ministerio limitó severamente la intervención de los pacientes y familias y su capacidad de depender de sus propias redes médicas y estrategias de búsqueda de atención. A los iraquíes de Bagdad que presentaban síntomas se les ordenó que se dirigieran a uno de los tres hospitales públicos para someterse a

“

Los iraquíes se han acostumbrado a improvisar las maneras de procurarse atención médica. Ante la Covid-19, bien y mal, no fue diferente

”

“
 LOS
 funcionarios
 de salud no
 pueden tratar
 el problema
 como si de una
 incompetencia
 técnica o
 cultural se
 tratara

”

pruebas y a una cuarentena, mientras que a todas las clínicas y hospitales privados se les prohibió realizar pruebas y tratamientos relacionados con Covid-19. Se ha prohibido el movimiento entre provincias y los viajes a países vecinos, una de las estrategias clave de las familias que buscaban atención durante los años de conflicto. Debido a la generalizada falta de confianza en el sistema de salud, no sorprendió a muchos profesionales médicos iraquíes que los pacientes de Covid-19 simplemente se negaran a ir al hospital hasta que ya no podían respirar y como última opción. Tampoco sorprende que una vez admitidos en los hospitales, las familias eludan las normas de control de infecciones para asegurarse de que el oxígeno y otras formas de apoyo técnico y moral lleguen a sus pacientes, y no es que lo hagan por ignorancia sino por la práctica adquirida en todos estos años de ser ellos quienes se han encargado de proveer los cuidados médicos.

Si el Ministerio de Salud pretende mejorar el cumplimiento de los pacientes de los protocolos de Covid-19 y de los protocolos para futuras epidemias, los funcionarios de salud no pueden tratar el problema como si de una incompetencia técnica o cultural se tratara. El núcleo del problema es la desconfianza de la sociedad que ha crecido durante años de guerra y abandono del sector sanitario. Un hecho positivo es que los médicos iraquíes actúan cada vez más en solidaridad pública con sus pacientes y en contra de la clase política. Durante las protestas de octubre de 2019, miles de médicos iraquíes salieron a las calles con sus batas blancas para denunciar la corrupción, el abandono por parte de la élite política de la sanidad pública, y el impacto nocivo que tiene en la atención a los y las pacientes. Sin embargo, hasta que la presión popular no produzca reformas

significativas, las familias iraquíes que se enfrentan a la Covid-19, al cáncer y a otras enfermedades probablemente seguirán dependiendo de sus propias redes y prácticas para gestionar y dar respuesta a sus enfermedades graves.

Notas

- [1] Alissa Rubin, “Stigma Hampers Iraqi Efforts to Fight the Virus”, *The New York Times*, March 14, 2020.
- [2] “A Difficult Day for Corona Patients in Iraq and Warnings of a Second Wave”, *Al Jazeera*, June 28, 2020. [Arabic]
- [3] A Yaqoub, *et.al.*, “Depleted Uranium and the Health of People in Basrah: Epidemiological Evidence; The Incidence and Pattern of Malignant Diseases Among Children in Basrah with Specific Reference to Leukemia During the Period of 1990-1998”, *Medical Journal of Basrah University (MJBU)* 17/1,2 (1999). Cita de James Ciment, “Iraq Blames Gulf War Bombing for Increase in Child Cancers,” *BMJ* 317 (December 12, 1998).
- [4] Omar Dewachi, *Ungovernable Life: Mandatory Medicine and Statecraft in Iraq* (Stanford: Stanford University Press, 2017).
- [5] James Ciment, “Iraq Blames Gulf War Bombing for Increase in Child Cancers,” *BMJ* 317 (December 12, 1998).
- [6] Royal Society, “The Health Hazards of Depleted Uranium Munitions,” May 22, 2001.
- [7] Hayder Al-Mohammad, “What Is the ‘Preparation’ in the Preparing for Death?” *Current Anthropology* 60/6 (2019).
- [8] Mac Skelton, Zmkan Ali Saleem, “Iraq’s Political Marketplace at the



DAVID MANRIQUE

- Subnational Level: The Struggle for Power in Three Provinces”, *Conflict Research Programme*, London School of Economics and Political Science, London (2020).
- [9] James Mac Skelton, *Cancer Itineraries Across Borders in Post-invasion Iraq: War, Displacement, and Geographies of Care* (Tesis doctoral, Johns Hopkins University, 2018).
- [10] Ahmed Majeed Al Shammari, “Environmental Pollutions Associated to Conflicts in Iraq and Related Health Problems”, *Reviews on Environmental Health* 31/2 (2016).
- [11] R. A. Fathi, L. Y. Matti, H. S. Al Salih, and D. Godbold, “Environmental Pollution by Depleted Uranium in Iraq with Special Reference to Mosul and Possible Effects on Cancer and Birth Defect Rates”, *Medicine, Conflict and Survival* 29/1 (2013).
- [12] C. Busby, M. Hamdan and E. Ariabi, “Cancer, Infant Mortality and Birth Sex-Ratio in Fallujah, Iraq 2005–2009”, *International Journal of Environmental Research and Public Health* 7/7 (2010).
- [13] Mac Skelton et al, “High-Cost Cancer Treatment Across Borders in Conflict Zones: Experience of Iraqi Patients in Lebanon”, *JCO Global Oncology* 6 (2020).
- * Publicado originalmente por Middle East Research and Information Project en <https://merip.org/>; traducción de Loles Oliván Hijós para Rebelión (www.rebellion.org) ◀

Fortuna

Negocios y Finanzas

En línea

revistafortuna.com.mx

Fortuna [NEGOCIOS](#) [ECONOMÍA](#) [FINANZAS](#) [Tecnología](#) [OPINIÓN](#)

www.revistafortuna.com.mx

VIERNES, ENERO 26, 2018 BLOG [EDICIONES EMPRESAS](#) [SUSCRIPCIONES](#) [PUBLICIDAD](#) [DIRECTORIO](#)

Inicio [Ediciones Impresas](#)

Ediciones impresas

Fortuna
Negocios y Finanzas

El regreso de los Ingenieros

Quedó listo el programa del primer Foro Fundadores

Actualización: Fortuna enero 26, 2018

Fortuna [NEGOCIOS](#) [ECONOMÍA](#) [FINANZAS](#)

www.revistafortuna.com.mx

VIERNES, ENERO 26, 2018 BLOG [EDICIONES EMPRESAS](#) [SUSCRIPCIONES](#) [PUBLICIDAD](#) [DIRECTORIO](#)

Inicio [NEGOCIOS](#) [Inversiones](#)

INVERSIONES

[Banca](#) [Empresas Privadas](#) [Empresas Públicas](#) [Energía](#) [Franquias Privadas](#) [Franquias Públicas](#)

Fortuna [NEGOCIOS](#) [ECONOMÍA](#) [FINANZAS](#) [Tecnología](#)

www.revistafortuna.com.mx

VIERNES, ENERO 26, 2018 BLOG [EDICIONES EMPRESAS](#) [SUSCRIPCIONES](#) [PUBLICIDAD](#) [DIRECTORIO](#)

Inicio [NEGOCIOS](#) [Inversiones](#)

INVERSIONES

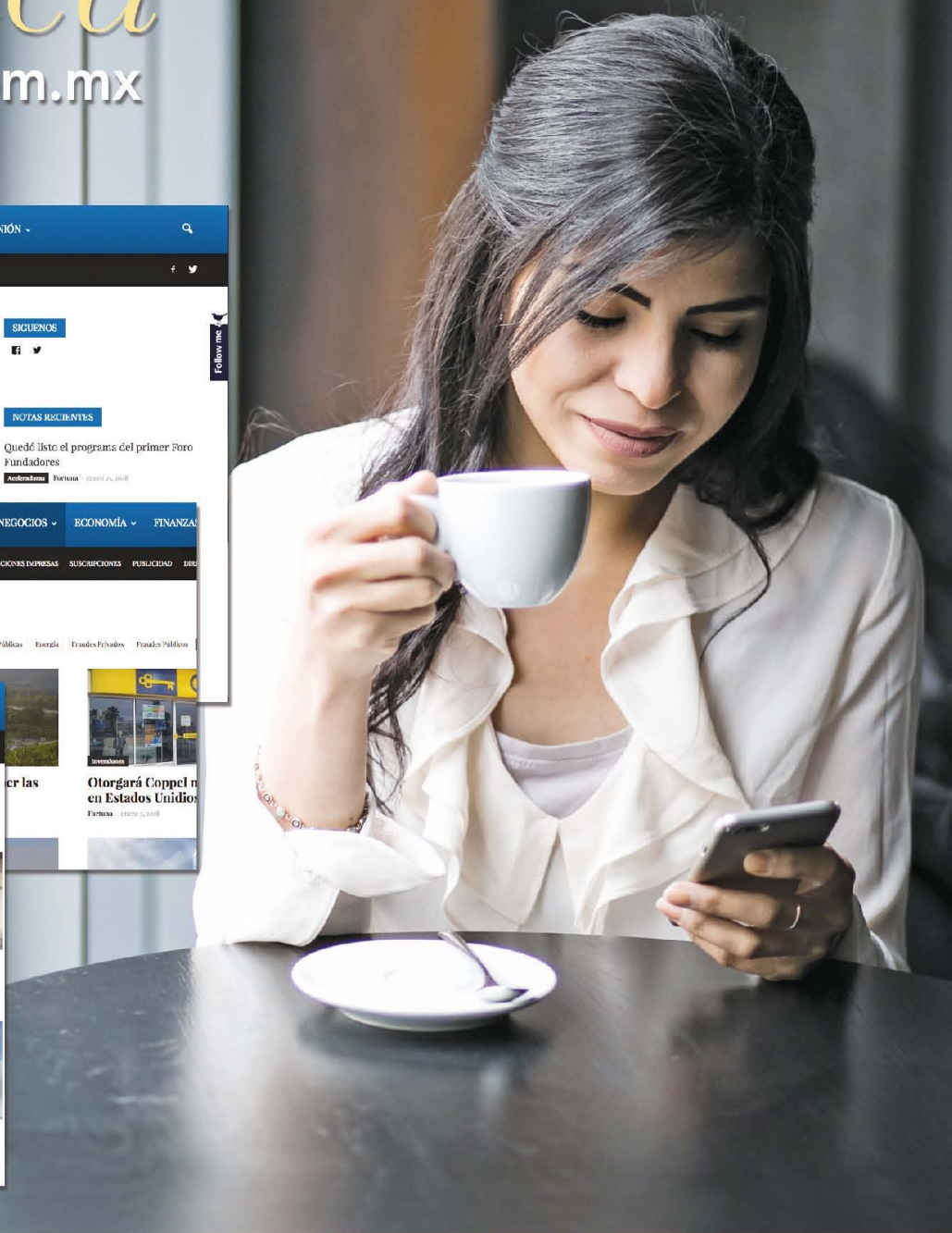
[Banca](#) [Empresas Privadas](#) [Empresas Públicas](#) [Energía](#) [Franquias Privadas](#) [Franquias Públicas](#) [Inversiones](#)

Aboga Sener por mantener las rondas de licitaciones
Fortuna enero 25, 2018

Otorgará Coppel microcréditos en Estados Unidos
Fortuna enero 25, 2018

BBVA Bancomer, innovación en banca de inversión
Fortuna diciembre 26, 2017

Fibra Uno aumentará 27% la superficie rentable en 2020
Fortuna diciembre 26, 2017



◀ CONECTA CON NOSOTROS



CONTRALÍNEA
PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN



SÍGUENOS EN
www.contralineacom.mx
Y EN NUESTRAS REDES SOCIALES

 facebook.com/contralineacom  [@contralineacom](https://twitter.com/contralineacom)  [Revista Contralineacom](https://www.youtube.com/RevistaContralineacom)

NO TE QUEDES CON ESOS KILOS DE MÁS

El ISSSTE cuenta con un programa especializado para mejorar tu salud.

PPRESyO

TU SALUD TIENE EL
**PROGRAMA DE PREVENCIÓN
Y REGRESIÓN DEL SOBREPESO
Y LA OBESIDAD**



GOBIERNO DE
MÉXICO



ISSSTE
INSTITUTO DE SEGURIDAD
Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO